
TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y LUCHAS CAMPESINAS EN COLOMBIA: UN BALANCE RETROSPECTIVO (1950-1990)

León Zamosc*

I. INTRODUCCION

Políticamente, el período de la historia colombiana que vamos a examinar es el período del Frente Nacional, el régimen de coalición que establecieron los dos partidos tradicionales para poner fin a lo que se conoce como *La Violencia*, la guerra civil liberal-conservadora que desangró al país durante los años cincuenta¹. El Frente Nacional se inició en 1958 como un arreglo consociacional basado en la paridad, la alternación y la exclusividad: el poder institucional se dividía en partes iguales, las presidencias se alternaban, y las únicas fuerzas que tenían acceso a la política eran los partidos Liberal y Conservador². Al amparo del acuerdo, la clase política bipartidista se valió del monopolio sobre los recursos del Estado para cimentar un vasto tejido de relaciones de patronazgo y convertir al clientelismo en uno de los elementos articuladores fundamentales del sistema político³. El Frente

Nacional concluyó formalmente en 1974, pero los dos partidos lo mantuvieron “de facto” hasta 1986 a través de fórmulas negociadas de poder compartido. Hoy, mirando hacia atrás, desde esta coyuntura de finales del año 1990, podemos decir que la agitación social y las manifestaciones de violencia que sacudieron a Colombia durante los años ochenta fueron indicativas de los estertores finales de ese régimen de coalición. En efecto, uno de los aspectos claves de las confrontaciones recientes es el hecho de que la antigua rivalidad bipartidista no representó ningún papel relevante. Los elementos más salientes fueron el desborde de la protesta popular, el desafío guerrillero, y el ascenso del narcotráfico. Cada uno a su modo, y dentro de un juego de coincidencias y desfases en sus impactos directos e indirectos sobre la escena política, estos procesos fueron impugnando la legitimidad del régimen y socavando las bases de la autoridad del Estado⁴. El resultado final de la interacción

* Sociólogo, profesor de la Universidad de California, San Diego.

1 Sobre la guerra civil, véase G. Guzmán, **et al.**, *La Violencia en Colombia*, Bogotá, 1962; P. Oquist, *Violence, Conflict, and Politics in Colombia.*, New York, 1980; y J. Walton, *Reluctant Rebels; Comparative Studies of Revolution and Underdevelopment.*, New York, 1984, pp. 72-102.

2 Para breves descripciones de los términos del Frente Nacional véase H. F. Kline, *The National Front: Historical Perspective and Overview*, en R. A. Berry et al. (eds.), *Politics of Compromise: Coalition Government of Colombia*, New Brunswick, 1980, pp. 71-72; y J. Hartlyn, *Topic Politics of Coalition Rule in Colombia*, Cambridge, 1988, pp. 3-4.

3 F. Leal, *El sistema político del clientelismo*, Mimeo, Bogotá, 1989.

4 Las múltiples facetas de la crisis son abordadas en F. Leal y L. Zamosc (eds.), *Al filo del caos: Crisis Política en la Colombia de los años ochenta*, Bogotá, 1990.

entre las condiciones generadas por estos procesos y la eventual apertura política desde arriba, fue la elección de la Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva carta fundamental para el país. El período que nos interesa es, entonces, un período entre dos grandes conmociones sociales que, a su vez, fueron manifestaciones de dos grandes crisis políticas: la crisis de la competencia exacerbada entre los dos partidos tradicionales, y la crisis del intento de congelar la vida política a través del contubernio bipartidista.

Desde el punto de vista económico, las tres décadas del Frente Nacional fueron décadas de gran crecimiento urbano, expansión industrial y consolidación de un robusto capitalismo criollo en el país⁵. El proceso tuvo mucho que ver con la estabilidad política que proveyó el régimen de coalición, pero también estuvo determinado por otras circunstancias favorables relacionadas con el volumen y la distribución espacial de la población, los recursos naturales, las características del desarrollo previo del sector exportador, la existencia de tradiciones mercantiles y de vocación empresarial, y una serie de bonanzas sucesivas en el terreno de las exportaciones convencionales y subterráneas. Estos factores confluyeron para generar una experiencia exitosa de acumulación y crecimiento capitalista: en los años sesenta y setenta Colombia mantuvo tasas sostenidas de expansión económica y, a pesar del impacto de la recesión y del problema de la deuda externa, fue uno de los pocos países latinoamericanos que registraron índices positivos de crecimiento económico durante la famosa “década perdida” de los años ochenta⁶.

Sobre este contexto de transformaciones políticas y económicas, nos imponemos aquí una doble tarea: investigar las modificaciones que han tenido lugar en el medio rural y

en la situación de los campesinos, y examinar las orientaciones y las conductas de estos últimos en relación al proceso de cambio en su conjunto. Desde el punto de vista histórico se trata, obviamente, de dos aspectos que son parte de una única realidad en movimiento. Pero los métodos de análisis y de comunicación de resultados se caracterizan, necesariamente, por una lógica de compartimentalización. Por lo tanto, dedicaremos la primera mitad del ensayo a la evolución de la cuestión agraria en Colombia, prestando atención al desempeño macroeconómico del sector agropecuario y analizando, desde ángulos diversos, el problema clásico de la oposición entre agricultura campesina y agricultura capitalista. En la segunda mitad consideraremos al campesino como actor social y político, examinando los dos grandes ciclos de luchas agrarias que se presentaron durante el Frente Nacional y considerando algunos aspectos de la situación actual en relación a las perspectivas para la democratización en el campo. Al concluir, esbozaremos una visión global y plantaremos algunos argumentos de carácter interpretativo-teórico sobre el sentido de los cambios agrarios y la significación de las luchas campesinas.

II. LA EVOLUCION DE LA CUESTION AGRARIA

Hay dos problemáticas esenciales que, en todo proceso de modernización capitalista, conforman el meollo de la cuestión agraria. Una de ellas, que puede calificarse como “funcional”, tiene que ver con el papel que cumple el sector agropecuario dentro del desarrollo en su conjunto. Aquí, el dilema clave se define en

5 Para recuentos generales de la evolución económica de Colombia bajo el Frente Nacional, véase J.A. Ocampo *et al.*, **La Consolidación del Capitalismo Moderno: 1945-1986**, en J. A. Ocampo (ed.) **Historia Económica de Colombia**, Bogotá, 1987; A. Acevedo *et al.*, **Una aproximación sobre el desarrollo industrial colombiano: 1958-1980**, en J. A. Bejarano (ed.) **Lecturas sobre Economía colombiana**, Bogotá, 1985; y S. Kalmanovitz, **Economía y Nación: una breve historia de Colombia**, Bogotá, 1985, pp. 415-512.

6 En los años sesenta y setenta las tasas de crecimiento del PIB colombiano se mantuvieron alrededor del 6% (World Bank, **World Tables**, Washington, 1983, pp. 40-41, 488-489). En los años ochenta, excluyendo a algunas islas del Caribe, sólo Colombia y en menor medida Brasil, mantuvieron índices positivos de crecimiento económico (Economic Commission for Latin America and the Caribbean, **Economic Survey of Latin America and the Caribbean**, Santiago de Chile, 1989, p. 13).

términos de la capacidad de respuesta de la agricultura frente a las exigencias de los procesos de urbanización e industrialización. La segunda problemática, a la cual podemos referirnos como el componente “estructural” de la cuestión agraria, nos remite a la fisonomía interna del sector agropecuario. ¿Prevalecerá una agricultura capitalista cimentada sobre la concentración de la propiedad, el trabajo asalariado y la producción en gran escala? ¿O predominará una agricultura campesina basada en la distribución amplia de la tierra, la mano de obra familiar y las pequeñas escalas de producción? En esta sección, bosquejaremos una visión general de la manera como se han venido dilucidando ambos aspectos de la cuestión agraria en las últimas décadas del proceso de desarrollo colombiano. Al examinar el componente “funcional” nos concentraremos en algunas variables que nos permitan evaluar el desempeño global del sector agropecuario. En la consideración del aspecto “estructural” prestaremos especial atención al campesinado, a su posición desde el punto de vista del acceso a la tierra, y a la evolución de su agricultura en relación a la agricultura capitalista.

Panorama agrario de los años cincuenta y sesenta

Aunque los efectos de la guerra civil se hicieron sentir hasta la década de los sesenta, sólo la primera parte del conflicto implicó verdaderos trastornos para la economía del país. A partir de 1953 los enfrentamientos se redujeron a áreas marginales, lo cual favoreció una rápida normalización. De hecho, el período de pacificación después de **La Violencia** fue también un período clave para la industria colombiana, que se beneficiaba de la coyuntura mundial de posguerra y efectuaba un marcado avance en la sustitución de manufacturas importadas⁷.

Esta expansión planteaba grandes desafíos a la agricultura, no solamente porque multiplicaba la demanda de alimentos y materias primas, sino también porque hacía aumentar la relevancia estratégica de las exportaciones agrícolas como medio para obtener divisas y hacer posible la importación de equipos industriales.

¿Cuáles eran los rasgos principales de la estructura agraria que debían responder a esos desafíos? Para aproximarnos a la realidad rural y proveer una breve descripción del contexto de los años cincuenta y sesenta, el mejor expediente es observar las diferencias regionales. La mayor parte de la superficie agraria total correspondía a las zonas planas del país, donde prevalecía el latifundio ganadero. A lo largo y ancho de los valles interandinos, la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, el escenario característico era el de las grandes haciendas cuyos predios eran trabajados por peones en la cría de ganado o, en menor medida, adjudicados a arrendatarios y aparceros campesinos por medio de contratos de corte tradicional⁸. En los intersticios de esa estructura latifundista, el campesinado independiente se reducía a grupos aislados en las cercanías de algunas ciudades y en áreas marginales de colonización. Vistas en su conjunto, las planicies de tierra caliente evocaban la imagen de una estructura agraria atrasada y señorial. Pero el desarrollo industrial urbano estaba introduciendo cambios que ya eran visibles hacia principios de los años sesenta. En muchas haciendas de los valles, y también en ciertos puntos de la Costa Atlántica, los hatos retrocedían ante nuevos cultivos de caña de azúcar, arroz, algodón y plantas oleaginosas, que eran emprendidos por los terratenientes mismos o por arrendatarios capitalistas. El surgimiento de estos enclaves de producción agrícola en gran escala implicaba, no solamente una mayor demanda de trabajo asalariado, sino también los inicios de un proceso de fuerte capitalización

7 J.A. Bejarano, *Ensayos de Interpretación de la Economía Colombiana*, Bogotá, 1978, pp. 14-17.

8 Para estudios sobre regiones latifundistas típicas véase A.E. Havens et al., *Cereté un área de latifundio*, Bogotá, 1965; y A. Reyes, *Latifundio y Poder Político*, Bogotá, 1978.

en tomo al uso de insumos, maquinarias y nuevas tecnologías⁹.

Las regiones andinas presentaban un paisaje estructural más diverso. En las áreas templadas de vertiente prosperaba el café, que desde principios de siglo era el principal producto de exportación y que, como tal, había representado un papel decisivo en la integración económica y en el despegue industrial del país¹⁰. La expansión cafetera original había tenido lugar sobre bases principalmente parcelarias, pero hacia los años sesenta ya había paridad productiva entre fincas campesinas y fincas capitalistas. En las demás zonas de vertiente y en los altiplanos de tierra fría había reductos de haciendas tradicionales o en proceso de modernización, pero lo que realmente predominaba era la pequeña producción familiar centrada en cultivos como la papa, el maíz, el frijol, y la caña panelera¹¹. En su conjunto, las áreas andinas incluían al grueso de los campesinos colombianos, que en 1960 aportaban la mitad del principal producto de exportación y abastecían la mayor parte de los alimentos que se consumían en el país¹². Pero los estratos inferiores de ese sector campesino sufrían las consecuencias del minifundio y el fuerte crecimiento demográfico. Entre 1951 y 1964, más de dos millones de personas emigraron del campo a las ciudades¹³. Paralelamente, decenas de miles de familias campesinas de los Andes descendían hacia nuevos frentes de colonización que se abrían en el piedemonte oriental y en otros lugares del país¹⁴.

Esta reseña nos indica que, hacia los años cincuenta y sesenta, la realidad del campo colombiano no correspondía con la imagen de atraso e inmovilismo que podría atribuirse a una estructura agraria tradicional. En el sector de la gran propiedad, que difícilmente podría asimilarse al arquetipo clásico feudal, la concentración de las mejores tierras y el predominio de las relaciones salariales ofrecían un contexto propicio para que la agricultura capitalista comenzara a responder a los estímulos del desarrollo industrial. Paralelamente, lejos de exhibir el autarquismo estático de sociedades parcelarias tradicionalistas, el campesinado colombiano se caracterizaba por una notable orientación mercantil, una marcada dinámica de descomposición “por lo bajo”, y un impulso expansivo hacia la reconstitución de la economía campesina en áreas de nuevo asentamiento. No se trata, entonces, de comprender los cambios súbitos de un agro atrasado que es repentinamente impactado por el desarrollo capitalista. Más bien, lo que nuestro análisis debe rastrear es el itinerario de procesos dinámicos que ya se venían manifestando en el momento que tomamos como punto de partida.

Desempeño del sector agropecuario

Como ya se indicó, el análisis del componente “funcional” de la cuestión agraria nos remite a la evaluación de la performance del sector agropecuario. Para efectuarla, adoptaremos la estrategia de marcar los contrastes claves en-

- 9 Sobre los inicios de la agricultura capitalista véase T.I. Smith, 'Improvement of the Systems of Agriculture in Colombia', en T. I. Smith, **Studies of Latin American Societies**, New York, 1970; J.M. Gutiérrez, "The Green Revolution Marches On in Colombia", **Tropical Abstracts**. No. 28, 1971; L.J. Atkinson, "Changes in Agricultural Production and Technology in Colombia". **Foreign Agriculture Economic Reports**. No. 52, 1969; y V.D. Bonilla, 'El Valle del Cauca a la Hora de su Transformación Agraria', **Tierra**, No. 6, 1967.
- 10 Para una visión global de la evolución de la economía cafetera colombiana, véase M. Palacios. **El Café en Colombia: una historia económica, social y política, (1870-1970)**, Bogotá, 1979.
- 11 Sobre la situación de algunas regiones minifundistas en los años sesenta véase O. Fals Borda. **El hombre y la tierra en Boyacá**, Bogotá, 1957; J. E. Grunig, "The Minifundio Problem in Colombia", **Land Tenure Center Reprints**, No. 85, 1972; y L. Glass y V.D. Bonilla, "La Reforma Agraria frente al Minifundio Nariñense", **Tierra**. No. 4, 1967
- 12 V. M. Moncayo y F. Rojas, **Producción campesina y capitalismo**, Bogotá, 1979, pp. 150-155.
- 13 El cálculo aproximado es de 2.3 millones de personas basado en DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), **Censo Nacional de Población**, Bogotá, 1951 y 1964.
- 14 Para una reseña amplia de los procesos de colonización de los años cincuenta y sesenta véase INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria). **La Colonización en Colombia: una evaluación del proceso**, Bogotá, 1973.

tre principios de los años sesenta y mediados de los ochenta. El Cuadro No. 1 nos permite apreciar los principales cambios en la demografía rural y en el desempeño del sector agropecuario. En relación a la primera, lo más sobresaliente es la marcada disminución del peso relativo de la población del campo. Entre los censos de 1964 y 1985 el número de colombianos aumentó de 17.4 a 30.9 millones, pero la población rural se redujo de cerca de la mitad a aproximadamente un tercio del total. El factor que explica esta tendencia es la migración a la ciudad, que alcanzó un volumen de casi cuatro millones de personas entre 1964 y 1985¹⁵. Los datos sobre la distribución regional de la población rural indican que las áreas más expulsoras fueron las de mayor densidad campesina (zona andina) y las de mayor desarrollo de la agricultura capitalista (valles interandinos). Aunque el grueso de la población rural sigue concentrada en esas regiones, ha aumentado la proporción correspondiente a las zonas menos desarrolladas e integradas (Costa Atlántica y regiones periféricas)¹⁶. Con respecto al empleo, la consideración de la PEA en relación a la población rural total muestra un significativo aumento de la tasa de participación, tendencia que también se constata en el sector urbano y que generalmente se atribuye a los cambios en la estructura de edades y a la mayor incorporación femenina a la fuerza de trabajo¹⁷. En la distribución de la fuerza de trabajo agropecuaria se destaca el aumento en la proporción de trabajadores independientes y ayudantes familiares. Para los efectos de la discusión posterior, vale la pena recalcar que

la economía campesina es actualmente la principal fuente de empleo para más de la mitad de los trabajadores rurales del país¹⁸.

En el desempeño global del sector agropecuario lo primero que se destaca es que, aunque el número de explotaciones aumentó, la expansión de la superficie agropecuaria ha sido proporcionalmente mucho más marcada. Este fenómeno revela la dinámica de las zonas de colonización, donde generalmente se establece una agricultura campesina extensiva y donde también es frecuente la rápida reconcentración de la tierra a través de las compras de mejoras¹⁹. Otra tendencia importante que se ve en el Cuadro No. 1 es el descenso relativo del PIB agropecuario, que se redujo de casi un tercio del PIB nacional, a principios de los años sesenta, a aproximadamente la quinta parte hacia mediados de los ochenta. Pero más que una situación de crisis agropecuaria, lo que este descenso refleja es el fuerte crecimiento de la industria y los demás sectores de la economía. En realidad, los indicadores de la evolución de la producción agropecuaria son muy positivos, ya que en un intervalo en el cual la población colombiana creció en un 77%, la producción física de los cultivos principales y el valor real del PIB agropecuario aumentaron respectivamente en un 100% y 134%. El hecho de que estos aumentos hayan superado al incremento del 44% registrado en la PEIA rural es también indicativo de un marcado avance en la productividad del trabajo en la agricultura.

Pautas similares pueden apreciarse en el comercio exterior, donde las cifras muestran un

15 Cálculo del autor sobre la base de los datos publicados en DAÑE, *Censo Nacional de Población*, Bogotá, 1964, 1973 y 1985. En los períodos intercensales el promedio anual aproximado de emigrantes del campo a la ciudad fue como sigue: 150.000 entre 1951 y 1964, 200.000 entre 1964 y 1973, y 175.000 entre 1973 y 1985. Para un análisis demográfico del pico migratorio 1974-1973 véase M. Ordóñez, *Población y familia rural en Colombia*, Bogotá, 1986, pp. 82-97.

16 En el período cubierto por el Cuadro No. 1 (1954-1985) la Costa Atlántica y las regiones periféricas fueron las únicas que registraron aumentos absolutos (del orden del 26.6% y 36.3% respectivamente) en el volumen de la población rural.

17 F. Urrea, "Estudio Comparativo de los Mercados de Trabajo Urbano y Rurales en Colombia en el Período 1960-1984", *Cuadernos de agroindustria y economía rural*, No. 17, 1986, pp. 15-17.

18 Como se indica en las aclaraciones que acompañan al Cuadro No. 1, los datos se refieren a la **ocupación principal** de los trabajadores. Es cierto que buena parte de los jornaleros transitorios de la agricultura capitalista provienen del sector de economía campesina. Pero por otro lado muchos de los que declaran ser asalariados en su ocupación principal pueden trabajar en el sector campesino como ocupación secundaria. Si se considera a estos últimos, es fácil "er que los trabajadores rurales que mantienen algún tipo de vinculación con la economía campesina representan una proporción mucho mayor que el 54.4% que registran las estadísticas.

19 J. A. Bejarano y A. Berry, *El desarrollo agropecuario en Colombia*, Bogotá, 1990, pp. 83-97.

espectacular aumento del orden del 348% en el valor real de las exportaciones agropecuarias. A pesar del incremento relativo de la exportación de manufacturas, las exportaciones agropecuarias han ganado terreno dentro del PIB total nacional y siguen siendo responsables por la obtención del grueso de las divisas extranjeras. También hay que mencionar el auge de nuevos productos como las flores y el banano, que han hecho disminuir de manera no despreciable la prominencia del café dentro del valor total de las exportaciones²⁰. Por último, vale la pena destacar que si a principios de los años sesenta el balance del comercio exterior agropecuario colombiano (excluyendo el café) había sido levemente negativo, hacia mediados de los ochenta el país estaba exportando más del doble de lo que importaba. El balance pasó a ser particularmente favorable en los rubros de alimentos para el consumo directo, donde el valor de las exportaciones colombianas es ahora casi diez veces mayor que el valor de las importaciones.

Sobre la base de estos datos, podemos concluir que en Colombia se manifiestan las dos tendencias que son típicas en los países que atraviesan procesos de industrialización capitalista: la reducción del componente rural de la población nacional y la disminución del peso relativo de la agricultura dentro de la economía en su conjunto. Por otra parte, no cabe duda de que el caso colombiano constituye, por lo menos hasta ahora, una experiencia exitosa de resolución del componente "funcional" de la cuestión agraria. A lo largo de treinta años de gran crecimiento demográfico y expansión económica, el sector agropecuario se ha mostrado capaz, no solamente de alimentar a la población y proveer los insumos y las divisas para el desarrollo industrial, sino también de diversificarse, incrementar su productividad, y asegurar la autosuficiencia agrícola del país.

CUADRO No. 1

COLOMBIA: PERFIL DEMOGRAFICO Y ECONOMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO, PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA Y MEDIADOS DE LOS OCHENTA (VARIABLES SELECTOS)

POBLACION Y EMPLEO	PPIOS. MED.	
	1960s	1980s
(1) Población rural (millones)	8.3	10.6
(2) Población rural como parte de la población total	48.0%	34.3%
(3) Población rural por regiones:		
Zona andina	61.4%	57.4%
Valles interandinos	14.7%	13.9%
Costa Atlántica	18.0%	21.3%
Resto del país	5.9%	7.4%
(4) PEA (Población económicamente activa) rural (millones)	2.5	3.6
(5) PEA rural como parte de la PEA total	48.7%	33.8%
(6) Tipo de PEA rural:		
Asalariados	49.5%	45.6%
Independientes y ayudantes familiares	50.5%	54.4%
FINCAS, SUPERFICIE Y PRODUCCION:		
(1) Número de fincas en el sector agropecuario (millones)	1.2	1.4
(2) Superficie registrada en censos, catastros (millones has)	27.3	39.9
(3) Producción cultivos ppales (miles millones de tons)	6.4	12.8
(4) PIB agropecuario (miles millones ae \$ de 1975)	55.1	129.2
(5) PIB agropecuario como parte del PIB total	31.9%	21.0%
COMERCIO EXTERIOR		
(1) Exportaciones agropecuarias (miles millones de \$ de 1975)	15.4	69.0
(2) Exportaciones agrop. dentro del total exportaciones	79.2%	71.5%
(3) Exportaciones agrop. como parte del PIB total	8.9%	11.2%

20 Aquí es necesaria una aclaración sobre la cocaína. En 1988 se estimaba que los narcotraficantes repatriaban unos 3.5 billones de dólares anuales a Colombia. Según esto, la cocaína habría desplazado al café como principal producto de exportación y estaría agregando hasta un 10% al PIB nacional. Pero la cocaína no es una exportación agropecuaria, ya que se trata de un producto refinado cuya materia prima ya elaborada (la pasta o base de coca) proviene en un 95% de Perú y Bolivia. Sobre este tema véase B. Bagley, "Winning Battles, Losing the War: US Anti-Drug Policies en Latin America", Hemisphere, Vol. 1, No. 1, 1988.

POBLACION Y EMPLEO PPIOS. MED.

(4) Café dentro del valor total exportaciones agrop.	91.3%	81.8%
(5) Relación export/import agrop. (valor, sin caf)	0.8	2.2
(6) Relación export/import alimentos (valor, sin café)	1.0	9.7

FUENTES Y ACLARACIONES

Población y empleo. Todos los datos corresponden a 1964 y 1985. La zona andina comprende a los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Santander. Los valles interandinos incluyen al Huila, Tolima y Valle del Cauca. La Costa Atlántica abarca a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. El tipo de PEA rural se define según ocupación principal (excluyendo al personal de servicio doméstico y a los patrones rurales). Fuentes: DAÑE, **Censo Nacional de Población**, Bogotá, 1964 y 1985; J. A. Bejarano y A. Berry, **El desarrollo agropecuario en Colombia**, Bogotá, 1990, pp. 163, 165 y 169.

Fincas, superficie y producción. La información sobre el número de fincas, el PIB agropecuario y el PIB total corresponde a 1960 y 1986. Los datos sobre la superficie en censos y catastros, que se refieren a 1960 y 1984, dejan por fuera los territorios escasamente habitados del país (excluidos tanto en 1960 como en 1984: Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada; excluidos en 1960 pero incluidos en 1984: Arauca, Caquetá, Guajira y Putumayo). Las cifras sobre producción corresponden a 1960 y 1985 e incluyen a los 16 cultivos para los cuales existen estadísticas comparables (ajonjolí, algodón, arroz, azúcar, banano, cacao, café, cebada, frijol, maíz, panela, papa, plátano, tabaco negro, trigo y yuca). Fuentes: DAÑE, **Censo Nacional Agropecuario**, Bogotá, 1960; DAÑE, **Colombia Estadística**, Bogotá, 1986, pp. 79-80; DAÑE, **Colombia Estadística**, Bogotá, 1987, pp. 402-405; Ministerio de Agricultura, **Anuario de Estadísticas del Sector Agropecuario**, Bogotá, 1987, p. 154; V. Barco, **Plan de Economía Social**, Bogotá, 1987, p. 192; G. Delgado, **Clases sociales y políticas agrarias, Economía Colombiana**, No. 186, 1986, pp. 43, 52; World Bank, **World Tables**, Washington, 1983, pp. 40-41.

Comercio exterior. Todos los datos corresponden a 1960 y 1986. Fuentes: CIDA, **Colombia: Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario**, Washington, 1966, pp. 53,433; Ministerio de Agricultura, **Anuario de Estadísticas del sector agropecuario**, Bogotá, 1987, pp. 3-6, 154; V. Barco, **Plan de Economía Social**, Bogotá, 1987, p. 192; World Bank, **World Tables**, Washington, 1983, pp. 40-41.

Agricultura campesina y agricultura capitalista

Para dilucidar el aspecto “estructural” de la cuestión agraria hay que desplazar el foco analítico hacia el interior del sector agropecuario y examinar la evolución de los dos tipos de agricultura: la campesina y la capitalista. Los puntos de partida obligados son las modalidades de tendencia y la distribución de la tierra. En relación a la tendencia, la información más reciente proviene de la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria, que se realizó en 1988 y cuyos resultados acaban de ser publicados por el Ministerio de Agricultura²¹. La comparación de estos datos con los del censo agropecuario de 1960, indica que el cambio más importante ha sido el aumento de la superficie correspondiente a las fincas directamente operadas por propietarios, que pasó del 76.8% del área total en 1960, al 91.3% en 1988²². En buena medida este cambio se debe a los procedimientos de titulación que, al ir legalizando la posesión precaria en zonas baldías, hicieron que la superficie en colonato disminuyera del 11.7% al 1.7% del total²³. El otro factor importante fue la reducción del área bajo arrendamiento, aparcería y demás formas combinadas, que pasó del 11.5% en 1960 al 7.0% en 1988²⁴. La información por departamentos del país y por categorías de tamaño muestra que, actualmente, el grueso de la superficie bajo arrendamiento corresponde a fincas grandes, en las regiones donde se ha desarrollado la agricultura capitalista, y que la principal incidencia del arrendamiento y la aparcería en pequeña escala está en los departamentos en los que más se concentran los productores campesinos²⁵. En suma, es evidente que la forma de tenencia que se ha venido imponiendo como absolutamente dominante es la explotación en propiedad, que los arrendamientos y aparcerías existentes, se inscriben dentro de lógicas que tienden a ser pu-

21 Ministerio de Agricultura, **Primera encuesta nacional agropecuaria**, Bogotá, 1990.

22 J. A. Bejarano y A. Berry, **op. cit.**, pp. 119,121-122.

23 **Ibid.**,pp. 118-119.

24 **Ibid.**,pp. 118-120,122-125.

25 Ministerio de Agricultura, **op. cit.**, tablas sobre unidades de producción agropecuaria por formas de tenencia.

ramente capitalistas o campesinas, y que las relaciones serviles que habían sido típicas de las haciendas tradicionales han sido virtualmente eliminadas²⁶.

En el estudio de las modificaciones en la distribución de la tierra la principal limitante es la carencia de datos censales recientes, ya que el último censo agropecuario se efectuó en 1970. Es de esperar que el análisis de la Primera Encuesta Agropecuaria de 1988 permitirá derivar una imagen más fidedigna de la situación actual, sobre todo si se tiene en cuenta que la encuesta incluye información sobre el insumo de trabajo familiar y asalariado en el interior de las fincas (esto proveerá una dimensión adicional clave para dilucidar estadísticamente las correspondencias de los diferentes rangos de tamaño con la agricultura campesina y la capitalista). Mientras tanto, nuestro análisis seguirá la pauta de otros estudios que, para examinar los cambios en la distribución de la superficie, han contrastado los datos censales de 1960 con la información catastral de 1984²⁷. Aquí hay que efectuar un par de aclaraciones metodológicas. La primera tiene que ver con el hecho de que existen diferencias entre el concepto de "finca" que se utilizó en el censo de 1960 y el concepto de "predio" sobre el cual se basa el registro catastral. Para poder comparar los datos catastrales de 1984, nuestra primera operación fue someterlos al mismo método de conversión de "predios" a "fincas" que se aplicó en el estudio estadístico original del Catastro Nacional²⁸.

La segunda aclaración se relaciona con las dificultades que presenta el empleo de las categorías de tamaño como criterio para distinguir entre fincas campesinas y capitalistas. En Colombia casi todos los investigadores coinciden en localizar al campesinado en las explotaciones menores de 20 hectáreas y a la agricultura capitalista en los rangos superiores de tamaño. El "límite de las 20 hectáreas" ha sido repetidamente justificado por referencia a estudios empíricos y puede resultar conveniente para simplificar el manejo aproximado de las estadísticas globales²⁹. Pero el criterio dista mucho de ser perfecto porque hay factores como la calidad del suelo, el tipo de producción y la topografía que hacen, por ejemplo, que una finca de un tamaño determinado pueda sustentar una producción en gran escala en una región y sea insuficiente para absorber el trabajo de una familia en otra. Además, el "límite de las 20 hectáreas" deja de lado el problema de las diferencias que pueden existir en el interior del sector campesino. Para realmente resolver estas dificultades, las "mediciones" del carácter campesino y/o capitalista de las fincas tendrían que incluir otras variables además del acceso a la tierra³⁰. Como la información disponible no permite aún efectuar esas operaciones, hemos optado aquí por tratar al menos de atenuar las distorsiones del análisis por rangos de tamaño. Para ello, retomamos la metodología del estudio clásico del CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) que, para agrupar los datos censales de 1960 en tres grandes categorías de tamaño,

26 Sobre estos cambios, véase también J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, pp. 118-125; y O. Delgado, "Clases sociales y políticas agrarias", *Economía colombiana*, No. 186, 1986, pp. 40-41. Como se verá más adelante, uno de los factores claves en la eliminación de las relaciones serviles fue la legislación de reforma agraria de finales de los años sesenta, que colocó a los terratenientes ante la amenaza de una posible expropiación y desencadenó desalojos masivos de aparceros y arrendatarios.

27 Véase L. Lorente, et al., *Distribución de la propiedad rural en Colombia: 1960-1984*, Bogotá, 1985; J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, y O. Delgado, *op. cit.*

28 L. Lorente et al., *op. cit.*, pp. 7-12, 495-508.

29 Para discusiones y justificaciones del "límite de las 20 hectáreas" como aproximación operativa véase CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola), *Colombia: tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario*, Washington, 1966; pp. 3-5; H. Vélez, "Difusión de la producción mercantil y de la tecnificación en la agricultura colombiana", en M. Arrubla (ed.), *La agricultura colombiana en el siglo XX*, Bogotá, 1976, pp. 298-308; T. Siabato, "Perspectiva de la economía campesina", en A. Machado (ed.), *Problemas agrarios colombianos*, Bogotá, 1986, pp. 1986, pp. 377-380; y J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, pp. 335-336.

30 Sobre este problema metodológico véase T. Shanin, "La medición del capitalismo dentro del campesinado", *Estudios rurales latinoamericanos*, Vol. 1, No. 2, 1978.

tomó como referencia un criterio empírico de “finca familiar” (de tamaño suficiente para absorber la fuerza de trabajo de una familia promedio), y aplicó ese criterio de manera diferencial, según se tratara de regiones de explotación intensiva o extensiva³¹. El Cuadro No. 2 presenta la elaboración de los datos catastrales de 1984 según esta metodología y los compara con los resultados del estudio del CIDA para 1960. En el Cuadro No. 3, hemos profundizado en el análisis de los rangos de tamaño para obtener una visión más discriminada del sector campesino en los años ochenta. Es necesario insistir que, en este terreno, cualquier elaboración de los datos debe verse como una aproximación imperfecta que sólo puede ser útil para captar dimensiones globales y tendencias muy generales.

Lo más notable en el Cuadro No. 2 es el hecho de que no se perciben modificaciones drásticas en la distribución global de la tierra. Ha habido ensanches apreciables en todas las categorías de tamaño y las grandes fincas siguen en posesión de la mayor parte de la superficie agropecuaria. Con todo, si se miran los cambios relativos, puede notarse un cierto fortalecimiento de los sectores medios del campesinado, que se revela no solamente en el aumento del tamaño promedio de las fincas familiares (de 16.3 a 19.8 hectáreas), sino también en el leve incremento porcentual de la superficie correspondiente a esa categoría (del 24.5% al 27.8%). La otra tendencia aparente es hacia el “achicamiento” del sector de la gran propiedad, cuya participación en la superficie muestra un pequeño descenso (del 70.0% al 67.7%) y que también presenta una leve disminución en el tamaño promedio de las fincas (de 250.0 a 241.9 hectáreas). En su conjunto, lo que los datos sugieren es que dentro de un marco de expansión global de la superficie agropecuaria y de estabilidad general en el canon de distribución de la tierra, el campesinado logró no solamente ampliarse en términos absolutos, sino también mantener e incluso mejorar ligeramente su posición relativa en cuanto al Seceso a la tierra.

CUADRO No. 2
COLOMBIA: APROXIMACION A LA DISTRIBUCION DE LA TIERRA, SEGUN NUMERO Y TAMAÑO DE LAS FINCAS, 1960 Y 1984

FINCAS: miles de explotaciones

AREA: millones de hectáreas

Tamaño	[1]CENSO AGROPECUARIO 1960				[2]CATASTRO 1984			
	Fincas	%	Area		% Fincas	% Area	%	
Sub-familiar	765.1	64.1	1.1	5.5	914.7	62.1	1.5	4.5
Familiar	360.6	30.2	5.9	24.5	464.2	31.6	9.2	27.8
Multi-familiar	68.1	5.7	17.0	70.0	93.2	6.3	22.5	67.7
TOTAL	1.193.8	100.0	24.2	100.0	1.472.1	100.0	33.2	100.0

FUENTES Y ACLARACIONES

(1) Fuente: CID A, **Colombia: Tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico del sector agropecuario**, Washington, 1966, p. 72. Los datos incluyen 88.6% de los 27.3 millones de hectáreas registradas en el Censo Agropecuario de 1960. El estudio CIDA clasificó las fincas según su capacidad para absorber la capacidad de trabajo de una familia promedio. Las sub-familiares (de tamaño insuficiente) son las fincas menores de 5 hectáreas en las zonas de explotación intensiva y las menores de 10 hectáreas en las zonas de explotación extensiva. Las fincas familiares (de tamaño suficiente) son las de los intervalos 5-50 hectáreas en zonas intensivas y 10-100 hectáreas en zonas extensivas. Las fincas multifamiliares (de tamaño mayor al suficiente) tienen extensiones superiores a 50 has en zonas intensivas y 100 hectáreas en zonas extensivas. Regiones intensivas: Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Regiones extensivas: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

(2) Fuente: cálculos del autor con base en la información catastral publicada en L. Lorente **et al., Distribución de la propiedad rural en Colombia: 1960-1984**, Bogotá, 1985 pp. 46-51. Los datos incluyen 83.2% de los 39.9 millones de hectáreas registradas en el Catastro Nacional de 1984. Como el concepto catastral de predio es distinto al de finca o explotación, se efectuaron los ajustes correspondientes utilizando los factores de conversión estipulados en el citado trabajo (p. 503). Para comparar con la información de 1960 se siguió la metodología utilizada por la CIDA, agrupando las cifras en las mismas categorías de tamaño. La distribución de los datos regionales también es la misma, excepto la exclusión de Antioquia (que tiene catastro propio y no figura en el Catastro Nacional), y la inclusión de Meta y Caquetá (que no figuran en los datos de la CIDA para 1960 y que aquí se incorporan como regiones de explotación extensiva).

31 CIDA, op.cit., pp. 3-5, 71-112.

El Cuadro No. 3 desagrega los datos de las categorías de tamaño sub-familiar y familiar. En el caso de la primera se distinguen fincas microfundistas y minifundistas, y en el caso de la segunda, fincas autosuficientes y empresariales. Para este afinamiento de la metodología original del CIDA, tomamos como base la información empírica proveniente de un estudio del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) sobre los tamaños típicos de las unidades familiares en las diferentes regiones del país en 1988³². Las estimaciones presentadas permiten redondear una serie de aproximaciones a la cuestión de la importancia “física” del campesinado. Si se considera la totalidad de las fincas agrupadas en las categorías sub-familiar y familiar, el sector campesino podría dimensionarse en casi 1.4 millones de explotaciones, e incluiría a más del 90% del total de las explotaciones agropecuarias. Pero este cálculo “maximalista” correspondería a una definición sumamente amplia del campesinado. Si se quisiera una estimación más ajustada habría que excluir a las unidades empresariales o de tipo farmer, que tienen superficies mayores y presumiblemente utilizan un insumo importante de trabajo asalariado. En este caso, el sector campesino incluiría algo más de 1.2 millones de fincas equivalentes a un 86% del total de fincas en el país. Finalmente, el más estricto de los cálculos posibles requeriría que se dejara por fuera a los microfundistas, cuyo tamaño ínfimo permite presumir que dependen de salarios obtenidos fuera de sus fincas como fuente principal de sus ingresos. En este cálculo “minimalista”, que delimitaría a los campesinos como “productores cuya principal fuente de ingresos es la agricultura propia y que principalmente utilizan su fuerza de trabajo familiar”, el tamaño del sector podría esti-

marse en unas 860 mil unidades, que seguirían re-presentando al grueso de las explotaciones agropecuarias³³. Por otra parte, si se toma en cuenta el tamaño promedio de las familias rurales, los cálculos mínimos y máximos permiten establecer que el número de personas en el sector campesino oscila entre los 4.3 y 6.9 millones, lo cual equivale a aproximadamente la quinta parte del total de la población colombiana³⁴.

CUADRO No. 3
COLOMBIA: APROXIMACION CUANTITATIVA
AL SECTOR CAMPESINO, 1984

FINCAS: miles de explotaciones		
Categorías de tamaño	Fincas	% del total de fincas en el país
Subfamiliar (1) Microfundio	406.7	27.6
(2) Minifundio	508.0	34.5
Familiar (3) Autosuficiente	353.1	24.0
(4) Empresarial	111.1	7.5
Total sector campesino (cálculo “maximalista”)	1.378.9	93.6

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuente: cálculos del autor con base en la información catastral publicada en L. Lorente *et al*, **Distribución de la propiedad rural en Colombia: 1960-1984**, Bogotá, 1985, pp. 46-51. Véanse las aclaraciones en el cuadro anterior y en la nota 34. Las nuevas categorías de tamaño se definen como sigue: (1) hasta 1 hectárea en zonas de explotación intensiva, hasta 3 hectáreas en zonas de explotación extensiva; (2) entre 1 y 5 hectáreas en zonas intensivas, entre 3 y 10 hectáreas en zonas extensivas; (3) entre 5 y 20 hectáreas en zonas intensivas, entre 10 y 50 hectáreas en zonas extensivas; y (4) entre 20 y 50 hectáreas en zonas intensivas, entre 50 y 100 hectáreas en zonas extensivas.

32 INCORA. “Determinación de la unidad agrícola familiar: promedios municipales”, tabulados inéditos enviados por las oficinas regionales a la oficina central del INCORA, Bogotá, 1988.

33 Aquí se imponen dos advertencias. Por un lado, hay que recordar que los datos que estamos manejando en estos cálculos corresponden al 83.2% del total de la superficie agropecuaria de 1984 (ver aclaración en Cuadro No. 2), lo cual implica que hay una cierta subestimación del número de fincas campesinas. Por otro lado, hay que mantener presente que el concepto utilizado es estrictamente económico, ya que estamos hablando de los campesinos solamente como productores. La definición social y política del campesinado es mucho más amplia, ya que abarca a todos los grupos cuyos intereses, orientaciones y aspiraciones se definen por referencia a la producción parcelaria. Esto incluye no solamente a los microfundistas o “semiproductores”, sino también a sectores de jornaleros y desempleados que aspiran a conseguir tierra y convertirse en campesinos.

34 En 1988, el tamaño medio de los hogares rurales era de 5 personas. Véase U. Ayala, **Distribución de ingresos y mercado laboral en el sector rural colombiano**, Bogotá, 1989, p. 55.

Efectuadas estas estimaciones generales, vale la pena retomar al Cuadro No. 2. Aunque la imagen que se desprende del contraste entre 1960 y 1984 puede parecer estática, no hay que olvidar que se trata de datos agregados que subsumen muchos cambios de distinto signo a nivel de las estructuras agrarias regionales. Basta tomar en cuenta la magnitud de las transformaciones macroeconómicas, los movimientos migratorios y la expansión misma de la superficie agropecuaria para hacerse cargo de que, si bien algunas regiones pueden haberse mantenido relativamente estables, ha habido otras donde los procesos de habilitación, concentración y desconcentración de la tierra adquirieron un gran dinamismo³⁵. En el caso del campesinado, las estadísticas y los estudios regionales muestran situaciones de estabilidad en las zonas cafeteras y en los valles interandinos; movimientos de descomposición y recomposición cuyo resultado neto ha sido el de reforzar el carácter campesino de muchas zonas andinas; consolidación de bolsones parcelarios en algunas áreas ganaderas (a partir de la reforma agraria marginal en ciertos municipios de la Costa Atlántica y los valles interandinos), y una expansión importante en los frentes de nueva colonización. En el caso de la gran propiedad, las tendencias principales han sido de estabilidad relativa en las comarcas tradicionales de producción agrícola capitalista (valles interandinos y algunas zonas cafeteras); expansión a través de reconcentración de la tierra y desarrollo de la gran agricultura empresarial en algunas áreas de previa colonización (sobre todo en Urabá, Meta, y Llanos Orientales), y fragmentación de antiguos latifundios en virtualmente todas las áreas ganaderas del país.

¿Cuál ha sido el desempeño productivo de los campesinos en relación al del sector capitalista empresarial? Una forma de responder esta pregunta es utilizar la información de estudios recientes sobre los ritmos de crecimiento de ambos tipos de agricultura. Entre 1970 y 1988 el volumen físico y el valor real de la agricultura campesina registraron tasas de crecimiento prome-

dio anual de 3.5% y 3.7% respectivamente, mientras que las tasas correspondientes a la gran producción empresarial fueron de 5.3% y 4.3%³⁶. Estas cifras indican que la expansión del capitalismo agrario fue bastante mayor que la de la economía campesina y que, por lo tanto, la participación de esta última en el total de la producción tendió a disminuir. Otra manera de acercarse al asunto es considerar los datos sobre el peso de ambos tipos de agricultura en el valor de la producción. El Cuadro No. 4 confirma la tendencia general hacia una sensible disminución de la importancia de la economía campesina, que había tenido una participación superior a la mitad del valor total en 1960 y que bajó a algo más de un tercio en 1988. La tendencia fue particularmente marcada en el sector cafetero, donde la balanza se inclinó decididamente a favor del capitalismo agrario, y en las materias primas para la industria, donde el campesinado quedó reducido a una posición marginal. En la producción de alimentos para el consumo directo, la economía campesina logró mantenerse como principal abastecedora del mercado, pero también puede notarse un ligero retroceso relativo frente a la producción capitalista.

CUADRO No. 4
COLOMBIA: PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA CAMPESINA Y LA AGRICULTURA CAPITALISTA EN EL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA, 1960-1988

	[1] [2] Estimación 1960 Estimación 1988			
	Agri- cul- tura cam- pesina %	Agri- cul- tura capita- lista %	Agri- cul- tura cam- pesina %	Agri- cul- tura capita- lista %
Total agrícola	53.3	46.7	38.8	61.2
Café	50.0	50.0	29.5	70.5
Alimentos	60.9	39.1	59.7	40.3
Materias primas	26.4	73.6	10.5	89.5

35 Lo que sigue es una apretada síntesis basada en J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, pp. 98-113 y 345-353; O. Delgado, *op. cit.*, pp. 29-51.

36 J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, p. 361 (estas tasas corresponden a la producción agrícola excluyendo el café).

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuentes: J. F. Gaviria *et al.*, "El sector agropecuario y su relación con el empleo", en M. Arrubla (ed.), *La agricultura colombiana en el Siglo XX*, Bogotá, 1976, p. 532; L. Zamosc, *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*, Ginebra, 1987, p. 37; J. A. Bejarano y A. Berry, *El desarrollo agropecuario en Colombia*, Bogotá, 1990, p. 357; y O. Delgado, "Clases sociales y políticas agrarias", *Economía Colombiana*, No. 186, 1986, p. 49. En todas estas fuentes se utilizó el "límite de las 20 hectáreas" para distinguir entre agricultura campesina y capitalista.

A manera de síntesis, puede decirse que las evidencias que hemos considerado no son indicativas de un proceso de liquidación de la economía campesina colombiana. Desde el punto de vista demográfico, y a pesar del descenso de su peso proporcional, el campesinado continúa representando un sector importante de la población del país. En lo que respecta al acceso a la tierra, los campesinos ocupan hoy una mayor superficie que antes y siguen controlando aproximadamente un tercio del hectareaje total. El número de fincas campesinas ha aumentado y también se incrementó la superficie promedio de esas fincas. Finalmente, y a nivel de producción, la economía campesina ha experimentado una expansión en términos absolutos. Su pérdida de espacio es un fenómeno relativo que, como veremos en un momento, se explica por dos causas fundamentales: el dinamismo que experimentó la agricultura capitalista y la falta de condiciones que favorecieran un mayor crecimiento del sector campesino.

La escena agraria de los años noventa

Para caracterizar brevemente el nuevo paisaje socioeconómico del agro habría que comenzar subrayando algo que se desprende de las evidencias ya presentadas: el afianzamiento de una pauta de división del trabajo dentro de la cual el campesinado se especializa en alimentos para el mercado interno, y el capitalismo agrario en productos para la industria y la exportación. Con algunas excepciones, esto es paralelo a la consolidación de un patrón de territorialización diferencial de los dos tipos de agricultura. En las áreas planas, don-

de la propiedad de la tierra está concentrada y la topografía favorece la mecanización, prevalecen los cultivos de la agricultura capitalista: algodón, sorgo, soya, palma africana, caña de azúcar, arroz y banano de exportación. Las excepciones son las zonas de colonización y otros enclaves campesinos que producen maíz, ñame, yuca, cacao y plátano. En las vertientes y los altiplanos andinos, donde la propiedad de la tierra ha estado históricamente fragmentada y la topografía dificulta la mecanización, predominan los campesinos con sus cultivos de caña panelera, maíz, papa, frijol, hortalizas, café, plátano, tabaco y fique. El capitalismo "de montaña" sólo ha prosperado en circunstancias especiales, creadas por los altos precios de ciertos productos y la introducción de innovaciones tecnológicas que incrementan el insumo de trabajo a niveles que posibilitan la producción en gran escala. El café, la papa, las hortalizas y los frutales son cultivos en tomo a los cuales ha habido procesos de evolución capitalista, en algunos casos a partir de la modernización de antiguas haciendas, pero principalmente como resultado de la diferenciación de sectores campesinos empresariales y la entrada de inversionistas de origen urbano.

No podemos aquí detallar las características de la nueva economía campesina. Pero si se tratara de destacar lo más sobresaliente habría que mencionar el carácter pleno de su integración a los circuitos mercantiles. Esta mercantilización se ha venido profundizando por tres vías principales. Una de ellas es la especialización de los campesinos, quienes se concentran cada vez más en ciertos cultivos para la venta, y en el proceso se convierten en consumidores no sólo de productos manufacturados sino también de alimentos que ya no producen y adquieren en el mercado. La segunda vía es la de la incorporación de nuevas tecnologías, que han sido eficazmente promovidas por los programas estatales de desarrollo y que implican la compra de semillas, plaguicidas, fertilizantes y otros insumos abastecidos por la industria. Aquí vale la pena destacar que la brecha tecnológica entre el sector parcelario y el capitalista

tiende a cerrarse rápidamente y que los cultivos más dinámicos entre los campesinos han sido precisamente aquellos que son más intensivos en insumos comprados³⁷. La tercera vía de mercantilización es la participación en el mercado de trabajo asalariado. Los estudios muestran que en el interior de la economía parcelaria hay mucha contratación de jornaleros temporales en los períodos claves del proceso productivo y que, en su conjunto, el sector campesino se ha estabilizado como una gran reserva de trabajo asalariado para la agricultura capitalista y otras actividades económicas de las zonas rurales³⁸. Sobre la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 1988 se ha estimado que los salarios aportan más de la mitad de los ingresos familiares en las fincas campesinas más pequeñas y algo más de un tercio en las de mayor tamaño³⁹.

La continuidad más conspicua en relación al pasado es el hecho de que el campesinado sigue incluyendo a los sectores más pobres del país. Los datos nacionales sobre población con necesidades básicas insatisfechas indican que aproximadamente la mitad de los colombianos se encuentran por debajo del umbral de pobreza⁴⁰. En las áreas rurales, la Encuesta Nacional de Hogares de 1988 encontró que la proporción de población pobre asciende a dos tercios del total⁴¹. Más aún, los datos indican que hay mayor pobreza entre las familias de pequeños campesinos, que entre las familias

rurales que dependen completamente de salarios⁴². Frente a estos datos globales, existen evidencias regionales sobre numerosos casos de consolidación exitosa de sectores campesinos solventes y hasta empresariales⁴³. Este contrapunto ofrece evidencia indirecta sobre el que, a nuestro juicio, es otro contraste importante entre la situación actual y la de principios de los años sesenta: la mayor diferenciación del campesinado. Lamentablemente, este es un tema que no ha sido abordado de manera específica en la literatura sobre las transformaciones agrarias en Colombia. Para poder dilucidarlo se hacen necesarios estudios dinámicos que permitan rastrear sus dos dimensiones fundamentales: la diferenciación entre economías campesinas regionales y la que tiene lugar al interior de las mismas⁴⁴.

Por razones de espacio debemos conformarnos con una rápida enumeración de los principales factores que han conspirado contra un mayor desarrollo de la economía campesina. Sin duda alguna, el limitante clave ha sido el escaso acceso a la tierra, que debe verse como resultante de la falta de superficie disponible en las áreas tradicionalmente campesinas y de la no aplicación de una reforma agraria significativa en las zonas de gran propiedad. La falta de tierras frena el aumento de la producción y erosiona “por lo bajo” al campesinado, cuyos sectores más pobres pasan a depender más y más de los salarios o se suman a las corrientes emigratorias⁴⁵. En las zonas mar-

37 *Ibid.*, pp. 334-335. Los cultivos que pasaron a ser más intensivos en insumos son el café, el frijol, la caña panelera, los frutales, las hortalizas, la papa y el plátano.

38 *Ibid.*, pp. 338-341.

39 Los salarios representan 62.1% del ingreso familiar en las fincas menores de 2.5 hectáreas, 38.3% en las de 2.5 a 10 hectáreas, y 36.2% en las de 10 a 100 hectáreas. Véase U. Ayala, op. cit., Cuadro No. 48.

40 Según la información censal de 1985, la población con necesidades básicas insatisfechas ascendía al 45.6% del total nacional. Véase DAÑE, *Colombia estadística, municipal*, Bogotá, 1987, p. 511.

41 La proporción exacta es 62.6%. Véase U. Ayala, *Pobreza y mercado laboral en el sector rural colombiano*, Bogotá, 1989, p. 11.

42 Los porcentajes de pobreza registrados por la encuesta fueron los siguientes: 73.1% entre los hogares con menos de 2.5 hectáreas, 67.1% entre los hogares con parcelas de entre los 2.5 y 10 hectáreas, y 50.0% entre los hogares de asalariados rurales. Véase U. Ayala, op. cit., Cuadro No. 58.

43 Véase M. Arango et al., *Estudio sobre la economía campesina, Medellín*, 1989, pp. 1-70; y J. Forero, “Persistencia y modernización del campesinado”, en F. Bernal (ed.) *El campesino contemporáneo*, Bogotá, 1990.

44 La primera está determinada por las características de las regiones y/o por especializaciones productivas; la segunda proviene de la acumulación de ventajas y desventajas entre las fincas campesinas.

45 J. E. Jaramillo, *Estado, sociedad y campesinos*, Bogotá, 1988, pp. 13-14, 143-151.

ginales y de colonización los principales problemas han tenido que ver con las deficiencias infraestructurales y con la prestación de servicios, que obstaculizan la consolidación de las economías parcelarias y enfrían el espíritu pionero de los campesinos⁴⁶. Entre los factores que afectan a la economía campesina en su conjunto, vale la pena mencionar tres: el poco acceso al crédito agrícola institucional, la falta de apoyos relevantes a nivel del proceso de comercialización, y el progresivo deterioro real de los precios de los productos en los cuales se especializan los campesinos⁴⁷. Por último, no hay que olvidar la incidencia de fenómenos puntuales que, a pesar de que afectan a localidades específicas, tienen un efecto agregado no despreciable. Entre estos fenómenos, los que más han atentado contra el campesinado en los años ochenta han sido las alteraciones ecológicas y las múltiples manifestaciones de violencia que se han hecho sentir en las zonas rurales⁴⁸.

Frente a los limitantes de la agricultura campesina, el capitalismo agrario ha gozado ventajas sustanciales: garantías de protección a la gran propiedad frente a las pretensiones redistributivas de los campesinos, generosas líneas de crédito especialmente diseñadas para la agricultura capitalista, precios favorables de sustentación, protección arancelaria frente a la competencia externa, y escalas de producción que facilitan la comercialización propia por parte de los gremios productores⁴⁹. Desde estas condiciones, la agricultura capitalista

se expandió rápidamente y contribuyó de manera decisiva al desempeño satisfactorio del sector agropecuario colombiano. Sin embargo, desde el punto de vista del empleo rural, su impacto no fue favorable. Es cierto que el capitalismo agrario absorbe mucho trabajo temporal y que los ingresos salariales son por lo general superiores a los ingresos derivados de la producción campesina. Pero también es cierto que el sector capitalista ha generado menos empleo nuevo que el sector campesino, que sus zonas de implantación han sido grandes expulsoras de población rural, y que buena parte de sus trabajadores provienen actualmente de los pueblos y las pequeñas ciudades⁵⁰. Por otra parte, no hay que perder de vista que la etapa de despeque y auge ha quedado atrás y que desde finales de la década de los setenta la agricultura capitalista ha venido enfrentando dificultades por la saturación del mercado interno para algunos productos, la crisis de rentabilidad de ciertos cultivos, y la combatividad sindical en ramas productivas donde predominan los asalariados permanentes⁵¹. En las áreas ganaderas hay que destacar no solamente la zozobra ante la extorsión por parte de delincuentes comunes y grupos guerrilleros, sino también las distorsiones derivadas de la entrada de los mañosos⁵². Aquí hay que aclarar que la producción colombiana de coca es muy marginal y que, más que todo, los narcotraficantes se hacen presentes en el campo para comprar tierras de manera masiva. Además de buscar fachadas convenientes para escon-

46 Ibid., pp. 20-26, 159-167.

47 Sobre estos factores véase O. Delgado, *op. cit.*, p. 50; y J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, pp. 384-400.

48 Las alteraciones ecológicas incluyen los efectos de la contaminación ambiental, los desastres naturales, la construcción de represas, y las actividades mineras y madereras. Las manifestaciones de violencia son las derivadas del cruzamiento de conflictos entre fuerzas armadas, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

49 Véase la reseña de J. A. Bejarano, *Economía y poder*, Bogotá, 1985, pp. 243-304.

50 Entre 1951 y 1988 el empleo asalariado en la agricultura aumentó en un 30%, mientras que el empleo en las Ancas campesinas se incrementó en un 43%. Véase M. Arango et al., *op. cit.*, p. 9.

51 El caso más sobresaliente de crisis de rentabilidad fue el del algodón (véase A. Reyes, "La Violencia y el problema agrario en Colombia", *Análisis Político*, No. 2, 1988, p. 34). Los productos más afectados por los conflictos sindicales han sido la palma africana y el banano (sobre los conflictos en la zona bananera véase A. M. Bejarano. "La Violencia Regional y sus Protagonistas: el Caso de Urabá", *Análisis Político*, No. 4, 1988). Para reseñas más generales sobre las dificultades de la agricultura empresarial véase O. Delgado. "El Modelo Unidimensional de Desarrollo Agropecuario: Crisis y Proceso de Rediseño", *Coyuntura Agropecuaria*, Suplemento Especial No. 1, 1987; y A. Balcázar y A. Supelano, "Los retos del sector agropecuario durante el próximo decenio", *Economía colombiana*, No. 186, 1986.

52 J. A. Bejarano y A. Berry, *op. cit.*, pp. 150-162.

der las avionetas y los laboratorios, los mafiosos se interesan en la propiedad raíz porque la ven como un método rápido y eficaz para blanquear capitales e ir ganando influencia política desde el nivel local. Al disparar hacia arriba los precios de la tierra e incorporar inversiones que no se ajustan a criterios productivos, el proceso tiene el efecto general de descompagnar la lógica económica de la actividad ganadera⁵³.

La mejor forma de redondear una imagen de conjunto es insistir en que en los últimos treinta años el sector agropecuario respondió favorablemente al desafío macroeconómico planteado por la modernización y que en su interior se consolidó una pauta combinada de desarrollo, basada en la coexistencia de la agricultura campesina y la capitalista. En la conclusión del ensayo, plantearemos un argumento interpretativo sobre este patrón bimodal y su sentido adverso para los campesinos. Mientras tanto, lo que aquí nos interesa destacar es que el proceso implicó una redefinición de la estructura de clases en el campo colombiano. Por un lado, la fisonomía del sector campesino se alteró al desaparecer los grupos que estaban sujetos a relaciones serviles y al aumentar la diferenciación derivada de la mayor incorporación mercantil. En la actualidad el campesinado se compone de estratos acomodados de tipo farmer, comunidades nuevas en zonas de colonización, viejas economías regionales que se reproducen a distintos niveles de solvencia o pobreza según sus posibilidades productivas, y amplias capas que se vinculan al mercado de trabajo asalariado. Por otro lado, la expansión de la agricultura capitalista trajo la formación de un proletariado muy heterogéneo que ahora incluye no solamente a los peones tradicionales y a los

grandes contingentes de migrantes campesinos, sino también a nuevos sectores de trabajadores que residen de manera permanente en las barriadas urbanas y, en menor medida, en las plantaciones mismas. Al mismo tiempo, los latifundistas de antaño fueron relevados por nuevas generaciones de propietarios con mentalidad modernizante, empresarios que arriendan la tierra para producir por temporadas, profesionales y comerciantes que adquieren fincas para diversificarse y, últimamente, mañosos que reinvierten en el campo las utilidades del narcotráfico⁵⁴.

La complejidad de la escena rural contemporánea se hace aún más patente si al inventario de agentes socioeconómicos agregamos los viejos y nuevos protagonistas de carácter institucional, gremial y político. Uno de los propósitos de la segunda mitad de nuestro ensayo es justamente el de analizar las interacciones políticas entre el campesinado y los otros actores principales. Por ahora, cerraremos esta sección anticipando un breve comentario sobre el protagonismo estatal y su incidencia sobre el modelo de desarrollo agrario que a la larga se impuso en Colombia. Bajo el Frente Nacional, las políticas agrarias del Estado oscilaron al vaivén de los cambios en el modelo de acumulación capitalista, los matices programáticos de las diferentes administraciones, y las vicisitudes de los conflictos que se iban presentando en el campo⁵⁵. El curso inicial fue zigzagueante: esfuerzos para apoyar el surgimiento de la agricultura capitalista moderna hasta 1966, intentos de estimular al campesinado para aplicar una reforma agraria en las regiones latifundistas entre 1966 y 1970, y políticas radicales de contrarreforma y apoyo irrestricto al capitalismo agrario entre 1970 y

53 En 1989, funcionarios de la Federación de Agentes de la Propiedad Raíz estimaban que los mafiosos habían invertido unos cinco billones de dólares en fincas ganaderas (M. Collett, "Traffickers Threaten Land Reform", *Christian Science Monitor*, 24 January 1989).

54 En lo que se refiere a otras actividades relacionadas con la agricultura, también hay que mencionar el mayor peso de los sectores vinculados a los servicios, al transporte, al comercio y a las empresas industriales y financieras que se enganchan hacia arriba y hacia abajo en el eslabonamiento agroindustrial.

55 Lo que se presenta a continuación es un breve resumen de las políticas agrarias del Frente Nacional. Para más detalle véase L. Zamosc, *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia*, Ginebra, 1987, pp. 78-88, 169-173, 219-226; y A. Machado, *El problema agrario en Colombia y sus soluciones*, Bogotá, 1981, pp. 7-26.

1974. Finalmente, desde mediados de los años setenta y hasta el presente, la política agraria del Estado se estabilizó en torno a fórmulas que siguieron favoreciendo a la agricultura capitalista y, al mismo tiempo, trataron de reforzar a la economía campesina con esquemas asistenciales y programas de desarrollo rural integrado. Como resultado acumulativo de todo este proceso, el Estado fue asumiendo una presencia importante en el campo. Proliferaron los proyectos, se conformó una red de institutos descentralizados y entidades semioficiales, aumentaron las inversiones públicas en servicios y obras de infraestructura y, más recientemente, también se asignaron recursos para la rehabilitación de regiones afectadas por la violencia política. Mirando hacia atrás, no cabe duda de que la mayor presencia del Estado es uno de los rasgos más salientes del nuevo rostro del agro. También es indudable que este factor tuvo incidencia en el desempeño exitoso del sector agropecuario. Sin embargo, desde el punto de vista de la estructura agraria, la mayor presencia estatal no produjo modificaciones sustantivas. Al descartar la redistribución de la propiedad de la tierra y al privilegiar al capitalismo agrario dentro de sus políticas dualistas, la acción del Estado no hizo sino reforzar las tendencias que iban moldeando la pauta bimodal de evolución que hoy prevalece en el campo colombiano.

III. EL CAMPESINADO COMO ACTOR SOCIAL Y POLÍTICO

Si consideramos las luchas agrarias de las últimas tres décadas en su conjunto, podemos marcar una diferencia importante entre esas luchas y la conducta que exhibieron los campesinos durante la guerra civil de los años cincuenta. Es muy diverso lo que se ha escrito sobre *La Violencia*, pero existe un consenso básico sobre el hecho de que el elemento clave fue la sobredeterminación política. Lejos de luchar por sus propios intereses clasistas, el

campesinado se alineó faccionalmente con los caciques liberales y conservadores, y la mayor parte de las confrontaciones tuvo lugar entre los campesinos mismos⁵⁶. Frente a eso, las luchas agrarias del período del Frente Nacional se caracterizaron por su contenido social reivindicativo y por el hecho de que, cuando tuvieron expresiones políticas, esas expresiones fueron no solamente independientes sino incluso antagónicas en relación al régimen bipartidista. Para analizar estas luchas el mejor expediente es distinguir sus dos ciclos principales. En el primero, cuyos momentos de mayor auge se dieron hacia principios de la década de los setenta, lo principal fue un impulso ofensivo centrado sobre la lucha por la tierra. El segundo ciclo, que tuvo su apogeo hacia mediados de los años ochenta, presentó un espectro más amplio de demandas que, aunque tenían un sentido mayormente defensivo desde el punto de vista socioeconómico, adquirieron proyecciones importantes en el plano político. En nuestro recuento de estos dos ciclos de beligerancia campesina destacaremos aspectos claves como el tipo de sectores y reivindicaciones involucradas, las formas de movilización, la inserción de las luchas dentro del juego político más amplio, y las relaciones entre los campesinos y otros actores. Por su mayor relevancia para la presente coyuntura nacional, ofreceremos más detalles sobre las movilizaciones de los años ochenta y sobre sus implicaciones para el proceso de democratización en el campo.

La ANUC y las luchas por la tierra en los años setenta

El ciclo de los años setenta tuvo como principal protagonista a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, una organización que fue creada y promovida desde el Estado durante la administración de Carlos Lleras (1966-1970). Lleras, que lideraba la corriente reformista dentro del Partido Liberal, se planteó una agenda cepalina clásica para agilizar el proceso de in-

56 L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 24-27.

dustrialización⁵⁷. En el campo, su gobierno ofreció estímulo a los terratenientes que comenzaban a embarcarse en la agricultura capitalista. Pero sus principales esfuerzos se dirigieron hacia la provisión de apoyos y servicios estatales en las zonas campesinas y hacia la implantación de una reforma agraria que redistribuyera la tierra en las áreas latifundistas más atrasadas. Lleras veía el fortalecimiento del campesinado como un elemento esencial para ampliar los mercados para la industria nacional y aminorar el ritmo de la avalancha migratoria rural-urbana. A nivel político su principal motivación era asegurar la continuidad del apoyo de los campesinos al Frente Nacional, que en ese entonces enfrentaba el desafío electoral de una disidencia conservadora encabezada por el general populista Gustavo Rojas Pinilla.⁵⁸

Lleras logró reforzar la tibia ley existente de reforma agraria con una nueva ley que reconocía el derecho a la tierra a quienes trabajaban como arrendatarios y aparceros en las haciendas⁵⁹. Pero los terratenientes tenían gran influencia en el interior de los dos partidos tradicionales, y el presidente sabía que, dentro de la camisa de fuerza que era el Frente Nacional, la acción institucional no sería suficiente. Se necesitaba una buena dosis de presión externa que debilitara a los terratenientes dentro del bloque dominante e hiciera posible la aplicación de la reforma agraria por parte del Estado. Para generar esa presión, Lleras decidió saltarse las redes clientelistas de ambos partidos y establecer un nexo directo entre Estado y campesinado. El mecanismo concreto fue la promoción de una organización gremial nacional que representaría a los campesinos como usuarios de los servicios estatales y cola-

boraría en la implantación de la reforma⁶⁰. La campaña se coordinó desde el Ministerio de Agricultura, cuyos promotores entrenaron líderes campesinos y asistieron en la creación de los organismos locales, regionales y nacionales de la ANUC. Hacia el final del gobierno de Lleras se habían iniciado algunos programas de redistribución de tierras y había asociaciones de usuarios en todo el país. La respuesta campesina había sido especialmente favorable en las regiones de mayor concentración de la tierra, desde donde comenzó a hacerse oír un fuerte clamor por la profundización de la reforma agraria⁶¹.

El período de Misael Pastrana (1970-1974) habría de ser el de las grandes confrontaciones. El nuevo presidente conservador no compartía el entusiasmo de su predecesor por favorecer a los campesinos y, como la derrota electoral de Rojas Pinilla parecía haber asestado un golpe terminal a la amenaza del populismo, su gobierno no dio señales de disponerse a agilizar la reforma agraria⁶². Mientras tanto los terratenientes habían venido tomando sus propias medidas frente al peligro de la reforma, expulsando a decenas de miles de arrendatarios y aparceros en varias regiones del país⁶³. Los dirigentes de la ANUC, que se estaban radicalizando bajo la influencia de militantes comunistas, trotskistas y maoístas, denunciaron al régimen bipartidista e invitaron a los campesinos a ejecutar la reforma agraria por su cuenta. Como puede verse en la relación de invasiones presentada en el Cuadro No. 5, el año 1971 representó el momento clave de un embate que llegó a ser muy intenso en las áreas latifundistas de la Costa Atlántica y los valles interandinos⁶⁴. Sin embargo, la gran combatividad de los campesinos que luchaban por la

57 J. A. Bejaraño, *op. cit.*, pp. 90-95.

58 Sobre las diferentes motivaciones de las políticas de Lleras, véase L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 78-82.

59 *Ibid.*, p. 82.

60 *Ibid.*, pp. 82-88.

61 *Ibid.*, pp. 88-103.

62 *Ibid.*, pp. 116-117.

63 *Ibid.*, pp. 114-115. Véase también B. Bagley y F. Botero, "Organizaciones Campesinas Contemporáneas en Colombia: un Estudio de la ANUC", *Estudios rurales latinoamericanos*, Vol. 1, No. 1, 1978.

64 Para un análisis detallado de las luchas por la tierra véase L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 113-145. El estudio mostró que las invasiones de 1971 fueron llevadas a cabo por los siguientes sectores: arrendatarios y aparceros en haciendas tradicionales (41.1% de los casos), colonos en terrenos baldíos o inexplorados (35.9%), jornaleros en áreas de capitalismo agrario (17.7%), y grupos indígenas (5.3%).

tierra careció de un correlato significativo de acción directa en las otras regiones del país. Por sostener el objetivo de la reforma, la ANUC prestó escasa atención a las reivindicaciones de los otros sectores campesinos. En algunos frentes de colonización se notó cierta beligerancia, pero en las zonas minifundistas el auge del movimiento paso casi desapercibida⁶⁵.

CUADRO No. 5
COLOMBIA: INVASIONES DE TIERRAS, POR REGIONES DEL PAIS, 1970-1978

NUMERO DE INVASIONES					
Año	Zona andina	Valles interandinos	Costa Atlántica	Resto del país	Total
1970	8	21	8	10	47
1971	139	123	333	50	645
1972	6	17	30	1	54
1973	14	1	36	-	51
1974	37	4	81	1	123
1975	12	12	42	4	70
1976	1	10	3	1	15
1977	1	1	13	4	20
1978	-	-	4	2	6
TOTAL	219	189	550	73	1.031

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuente: L. Zamosc, La cuestión agraria y el Movimiento Campesino en Colombia, Ginebra, 1987, p. 124. La agrupación de los departamentos por regiones es la misma que se utilizó en el Cuadro No. 1.

De todas maneras, las oleadas de invasiones sacudieron la escena política colombiana. Alarmados por el ascenso de la ANUC y por sus implicaciones como desafío político sin precedentes a la autoridad del Frente Nacional, los terratenientes y la clase política bi-

partidista exigieron un acuerdo definitivo para sepultar la reforma agraria y contener al movimiento campesino. El acuerdo se formalizó en 1972 en la célebre reunión de Chicolal, donde representantes del gobierno y de los gremios terratenientes bosquejaron un puñado de leyes que dejaban sin piso legal la redistribución de la tierra y establecían generosas líneas de crédito para el desarrollo de la gran agricultura capitalista⁶⁶. Paralelamente, la administración Pastrana se embarcó en una campaña sistemática de divisionismo y represión para desarticular a la ANUC. A algunos líderes leales al liberalismo y al conservatismo se les ofrecieron incentivos para que se separaran y formaran una ANUC oficialista. Por otro lado el gobierno declaró ilegal a la ANUC radical, persiguió a sus dirigentes y ordenó que los grupos de invasores campesinos fueran desalojados sin contemplaciones⁶⁷.

La política de contrarreforma y represión, que continuó bajo la administración del liberal Alfonso López (1974-1978), fue muy instrumental en enfriar los furros campesinos. Pero varios factores adicionales contribuyeron al receso del movimiento agrario durante la segunda mitad de los años setenta. A nivel de contexto general hay que mencionar tres elementos: el hecho de que los grupos más radicales lograron algún acceso a la tierra gracias al impulso inicial de las luchas, la expansión del empleo como resultado del auge de la economía y del despegue de la agricultura capitalista, y los programas asistenciales y de desarrollo rural integrado que comenzaron a desarrollarse durante el gobierno de López y que eran vistos con complacencia entre algunos sectores campesinos⁶⁸. Dentro del movimiento mismo uno de los factores claves fue el divisionismo interno de la ANUC radical, provocado por las pugnas entre las fuerzas de izquierda que trataban de ganar capital político

65 Ibid., pp. 145-153.

66 Ibid., pp. 169-173.

67 Ibid., pp. 173-179.

68 Ibid., pp. 235-248, 265-272, 336-339.

cabalgando sobre las luchas campesinas⁶⁹. Eventualmente se impuso una línea de independencia política frente a esos sectores, pero la ANUC ya había quedado muy debilitada y acabó por desinflarse cuando el intento de crear un partido propio se tradujo en un completo fracaso en las elecciones de 1978. Los otros factores importantes fueron la burocratización y corrupción de algunos dirigentes y la incapacidad de esos mismos dirigentes para ajustarse a una situación en la cual la lucha por la tierra perdía plausibilidad y las reivindicaciones que ganaban primacía eran las de los campesinos que habían conseguido parcelas o que las tenían desde antes en las zonas minifundistas y de colonización⁷⁰. Como resultado neto de todo este proceso, hacia finales de los años setenta la ANUC radical languidecía como un aparato que carecía de apoyo entre las bases. Mientras un sector de la dirigencia optaba por reunificarse con la ANUC oficialista y volver a las toldas del clientelismo, otros grupos intentaban reagruparse y reconstruir un polo opositor a partir de un discurso contestatario⁷¹. Paralelamente surgían organizaciones agrarias nuevas, algunas independientes y otras ligadas a los partidos de izquierda que habían sido derrotados en las luchas internas de la ANUC⁷². Pero el contexto general era un contexto de desmovilización, y ningún actor organizativo tenía capacidad real de convocatoria.

En un análisis más detallado de la trayectoria de la ANUC, propusimos la interpretación de que los campesinos se valieron del poder de clase que había cristalizado en esa organización para tratar de definir a su favor la vía de evolución agraria en Colombia, y que en ese intento, fueron derrotados⁷³. El argumento se basó en la caracterización de la coyuntura de finales de los años sesenta y

principios de los setenta como un momento clave en la transición capitalista, un momento en el cual la mitad de la población colombiana todavía era rural, el capitalismo agrario estaba en una etapa apenas incipiente, y el campesinado podía aún volcar el proceso en su favor si lograba forzar la redistribución de la tierra. Este contexto estructural-temporal determinó los parámetros cardinales de las luchas de la ANUC. Marcó su localización, ya que casi todo el ímpetu del movimiento campesino se sintió en las regiones de conflictos de tierra. Definió los protagonistas centrales, que fueron los arrendatarios y aparceros que desafiaban a la gran propiedad desde adentro y los colonos que se disputaban los baldíos con las haciendas en proceso de expansión. Moldeó las formas de lucha, que consistieron casi siempre en invadir predios de manera aislada o coordinada y en tomarse o manifestar ante las oficinas del Instituto de Reforma Agraria para reclamar la redistribución. Y también propició la receptividad hacia los discursos radicales de izquierda que, después del fracaso del reformismo, proveían los ingredientes ideológicos necesarios para sustentar la toma directa de la tierra. Finalmente, nuestra interpretación en el sentido de que el movimiento campesino fue derrotado se basó en dos elementos fundamentales: por un lado, el alcance marginal de los logros de las luchas por la tierra, que permitieron acceder a parcelas a solamente la décima parte del total de familias que oficialmente se consideraban como beneficiarias potenciales de la reforma agraria; por otro lado, la amarga paradoja de que las luchas campesinas sirvieran como estímulo para que el Estado favoreciera el despegue definitivo de la agricultura capitalista, que era justamente lo contrario de lo que los campesinos buscaban alcanzar⁷⁴.

69 Sobre el proceso político de la ANUC véase S. Rivera, *Política e ideología en el movimiento campesino colombiano*, Ginebra, 1987, pp. 179-207.

70 L. Zamosc, op. cit., pp. 331-335, 339-344.

71 Ibid., pp. 344-351.

72 Ibid., pp. 340-343.

73 Ibid., pp. 369-377. Para otros estudios sobre la ANUC véase S. Rivera, op. cit., B. Bagley y F. Botero, op. cit., C. Escobar, *Trayectoria de la ANUC*, Bogotá, 1982; y A. Rudqvist, *Peasant Struggle and Action Research in Colombia*, Uppsala, 1986.

74 Véase el análisis de los logros de la lucha por la tierra en L. Zamosc, op. cit., pp. 265-275.

Crisis política y agitación agraria en los años ochenta

En buena medida la facilidad con que fue derrotada la ANUC se debió a que los campesinos libraron su batalla contra los terratenientes y el Estado dentro de un contexto de relativa paz política y desmovilización de otros sectores sociales. El ciclo de los años ochenta tuvo características muy distintas, ya que las luchas se desarrollaron dentro del marco de la profunda crisis política que precipitaría el derrumbe del régimen de coalición liberal-conservador. Para comprender el trasfondo general de esta crisis hay que tomar en cuenta que, en los años setenta, el país experimentó grandes cambios como resultado de la bonanza cafetera, la profundización industrial, la consolidación del capitalismo agrario, las expansiones petroleras y mineras, y el auge inusitado de actividades ilícitas ligadas al contrabando y al narcotráfico. Estos cambios agudizaron el contraste entre el anquilosamiento del régimen bipartidista y el gran dinamismo de la economía y la sociedad. Colombia se convirtió en un caso particularmente grave de insuficiencia del desarrollo político, alienación de amplios sectores e incapacidad para resolver ordenadamente los conflictos planteados por la modernización. La credibilidad de las instituciones comenzó a tocar fondo, y el país se fue convirtiendo en escenario de un vuelco masivo hacia la acción directa. A nivel popular, el recurso a la movilización pacífica adquirió vigencia como modo de arrancar reivindicaciones. Pero la expresión más trágica del colapso político fue la generalización de la violencia, ya que el Estado llegó a perder el monopolio sobre los medios de coerción a medida que se desbocaba la criminalidad común y proliferaban las organizaciones guerrilleras, los grupos armados de los mafiosos y las bandas paramilitares⁷⁵.

En la crisis política global de los años ochenta hay que distinguir tres componentes, tres cri-

sis diferentes cuyas manifestaciones se fueron dando de forma paralela y que en ciertos puntos estratégicos se entrecruzaron de manera dramática. Dos de esas crisis pueden definirse como crisis de legitimidad del Frente Nacional. Una de ellas se desarrolló en la relación con los sectores populares, las masas al poder político, que el régimen bipartidista fue incapaz de incorporar al no responder a sus demandas y aspiraciones. La segunda crisis de legitimidad tuvo que ver con la relación entre el Frente Nacional y las contraélites de oposición, que ante la permanente exclusión del juego político fueron escogiendo el camino de la insurgencia guerrillera. La tercera crisis se originó en el rápido ascenso del narcotráfico que, más que cuestionar la legitimidad del régimen, se erigió como polo de poder alterno que de hecho planteaba un desafío a la soberanía misma del Estado. Las luchas campesinas recientes, deben verse como parte de la rebelión de los sectores populares; es decir, como expresión directa de la primera de estas crisis. Su desarrollo, sin embargo, también estuvo influido por las manifestaciones de las otras crisis, sobre todo en las regiones de conflicto guerrillero y presencia de los narcotraficantes. Debido a las limitaciones de espacio, es imposible analizar a cabalidad todas las facetas del proceso⁷⁶. Nos contetaremos aquí con presentar un recuento sintético de los determinantes, las características y la significación de las movilizaciones de los años ochenta. En la última parte de esta sección, al evaluar las perspectivas para la democracia rural, redondearemos una visión general de las relaciones entre los campesinos y los otros actores relevantes.

Para aclarar el origen de la crisis de legitimidad entre los sectores populares hay que destacar sus dos raíces principales. La primera tiene que ver con el hecho fundamental de que el Frente Nacional desestimó las aspiraciones socioeconómicas del grueso de los co-

75 Para una descripción de las múltiples dimensiones de la violencia social y política de los años ochenta véase Comisión de Estudios Sobre la Violencia, **Colombia, Violencia y Democracia**, Bogotá, 1987.

76 Para un estudio más completo véase L. Zamosc, "El Campesinado y las Perspectivas para la Democracia Rural", en F. Leal y L. Zamosc (eds.), **Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta**, Bogotá, 1990.

lombianos y se dedicó a poner en práctica políticas de desarrollo que privilegiaban a los intereses empresariales'.⁷⁷ Aquí no es necesario entrar en detalles, ya que nuestro análisis previo de la cuestión agraria y la situación del campesinado puede considerarse como suficientemente ilustrativo en relación al tipo de gestión social que caracterizó a los gobiernos del régimen de coalición. La segunda raíz de la crisis de legitimidad fue la falta de representación de los sectores populares en el interior del Estado. Aquí sí es conveniente detenerse un momento y observar que bajo el Frente Nacional se perfeccionaron dos modos de relacionamiento radicalmente distintos entre el régimen y la sociedad civil. Las élites empresariales tienen acceso directo a la política tanto a través de su representación en los partidos como por medio de la negociación colectiva entre sus gremios y el gobierno⁷⁸. Por contraste, los nexos con la población plebeya se fundamentan en los mecanismos clientelistas tradicionales. En este caso, no hay acceso directo a la toma de decisiones ni existe relación colectiva entre partidos y grupos sociales. El truco clientelista reside, precisamente, en la segmentación de los nexos políticos y la exclusión de quienes están sujetos al poder. En Colombia esto se logra a través de tupidas redes de intermediarios que, en sus respectivas regiones, utilizan los recursos del Estado para distribuir favores y comprometer los votos de sus clientes⁷⁹. Operando en un contexto en el cual el Estado asigna recursos muy limitados a las necesidades populares, los que llegan a beneficiarse representan una proporción muy reducida de la población en su conjunto. En realidad, hay un antagonismo profundo entre el clientelismo y el principio de la ciudadanía. El clientelismo desarticula

a los sectores populares, descolectiviza sus demandas y los mantiene por fuera del sistema político. La participación electoral no tiene nada que ver con la representación, ya que los caciques consiguen los votos como proveedores de "privilegios" y no como representantes del pueblo. En suma, los sujetos del poder clientelista no tienen conexión directa con el Estado, carecen de representación, y nadie es responsable ante ellos. Como no cuentan como ciudadanos no es de extrañar que la acción estatal no responda a sus intereses.

Además de estos factores de fondo, dos circunstancias inmediatas contribuyeron al desbordamiento de la protesta popular de los años ochenta. Una de ellas fue la recesión económica que, aunque en menor medida que en los países vecinos, también se sintió en Colombia durante la primera mitad de la década⁸⁰. La segunda circunstancia fue el relajamiento de la represión. Desde la década de los setenta se había mantenido la política de mano dura frente a la protesta popular, y durante el gobierno del liberal Julio César Turbay (1978-1982) la represión se había intensificado aún más en respuesta al auge guerrillero. La presidencia del conservador Belisario Betancur (1982-1986) marcó un vuelco hacia la búsqueda de una solución del conflicto armado, hacia reformas políticas que restauraran la legitimidad del régimen, y hacia un tratamiento no policivo de las movilizaciones populares⁸¹. Estas orientaciones, mantenidas por el gobierno liberal de Virgilio Barco (1986-1990), crearon condiciones favorables para que las organizaciones populares exhibieran un talante más contestatario y para que se expresara el gran caudal de descontento que se había acumulado.

77 J. Hartlyn, op. cit., pp. 103-140.

78 Ibid., pp. 140-144.

79 Sobre los mecanismos clientelistas véase F. Leal, op. cit., J. Hartlyn, op. cit., pp. 145-183; y E. Díaz, *El Clientelismo en Colombia*, Bogotá, 1986.

80 S. Kalmanovitz, op. cit., pp. 491-526.

81 Sobre el proceso Betancur véase R. Santamaría y G. Silva, *Proceso Político en Colombia*, Bogotá, 1984.

CUADRO No. 6

COLOMBIA: CRONOLOGIA DE LOS EVENTOS AGRARIOS, SEGUN TIPOS PRINCIPALES DE ACCION COLECTIVA

Años	Actividades de carácter institucional		Actividades de carácter extra-institucional		Total
	[1] Eventos organizativos	[2] Peticiones y protestas	[3] Acción reivindicativa organizada	[4] Fenómenos colectivos espontáneos	
1978	6	8	1	·	15
1979	7	5	3	1	16
1980	11	10	8	1	30
1981	24	28	12	7	71
1982	23	24	12	1	59
1983	20	32	42	1	95
1984	22	33	54	2	111
1985	17	31	64	6	118
1986	28	30	80	5	143
1987	34	41	117	13	205
1988	24	23	58	11	116
Total	216	265	450	48	979

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuente: CINEP, **Archivo de Prensa**, microfichas carpeta Conflictos rurales, Bogotá, 1978-1988. Los tipos de acción colectiva se definen como sigue:

(1) Asambleas, encuentros, documentos y declaraciones públicas por parte de organizaciones campesinas y sindicales. (2) Peticiones, protestas y denuncias públicas. (3) Movilizaciones deliberadamente organizadas. (4) Disturbios, asonadas y desplazamientos espontáneos de pobladores en zonas afectadas por la violencia.

Hasta ahora, la reivindicación urbana ha sido el tema privilegiado en las investigaciones sobre el auge de las luchas populares de los años ochenta⁸². En las ciudades la principal forma de protesta fue el paro cívico, casi

siempre relacionado con demandas en torno al suministro y las tarifas de servicios básicos como agua potable, electricidad, alcantarillado y transporte. El ascenso de la protesta urbana fue muy pronunciado: 31 paros cívicos bajo el gobierno de Turbay, 97 durante el período de Betancur y 124 en los tres primeros años de Barco⁸³. Aunque aún carecemos de metodologías que permitan homologar los datos empíricos, sabemos que la pauta de intensificación en el campo fue básicamente la misma. El Cuadro No. 6, que resume la información de prensa sobre los eventos agrarios entre 1978 y 1988, muestra que el nivel de agitación se elevó durante el gobierno de Betancur y llegó a un apogeo ha-

82 Véase J. Giraldo, y S. Camargo, "Paros y Movimientos Cívicos en Colombia", **Controversia**, No. 128, 1985; J. Giraldo, "La Reivindicación Urbana", **Controversia**, No. 138-139, 1987; y W. J. Cartier, "Civic Movements and Politics en Colombia", **Canadian Journal of Latin America and Caribbean Studies**, Vol. 12, No. 24, 1989.

83 Cifras calculadas sobre la base de los datos de J. Giraldo, y S. Camargo, 'Paros y Movimientos Cívicos...', **op. cit.**, p. 9; J. Hartly, **op. cit.**, p. 87; y J. Henao, "La movida cívica crece y se amplía", **Cien Días**, No. 7, 1989, p. 21.

cia mediados del período de Barco⁸⁴. Sobre el descenso de 1988, que continuaría en los dos años siguientes y que también fue paralelo a un declive en las luchas urbanas, volveremos más adelante. Por ahora nuestro propósito es iniciar la caracterización de las luchas, subrayando que la beligerancia campesina fue un ingrediente fundamental de la protesta popular de los años ochenta.

El Cuadro No. 7 clasifica las movilizaciones agrarias locales y regionales del período 1978-1988 según reivindicaciones (lo cual permite aproximarse al tipo de sectores campesinos envueltos), regiones del país y modalidades de lucha. Como no es posible elaborar todas las conexiones, señalaremos las principales. En relación con los escenarios, se ve claramente que las regiones más prósperas, los valles interandinos y la zona cafetera, fueron las menos afectadas por la protesta. La agitación se concentró en las otras zonas andinas, la Costa Atlántica y las áreas marginales y de colonización. En la Costa Atlántica volvió a plantearse con fuerza la lucha por la tierra; pero con una variante interesante, ya que el grueso de los grupos de invasores provenían ahora de barriadas urbanas, inclusive de capitales regionales como Sincelejo y Montería⁸⁵. En las áreas andinas, se registraron luchas por la tierra en zonas indígenas del sur del país. Pero lo principal fue la defensa de la economía campesina, protagonizada por sectores que se habían venido especializando en ciertas producciones o que se vieron enfrentados a problemas de orden local. Se destacaron las movilizaciones por mejores precios y en defensa de los mercados para varios productos, y también los reclamos generados en muchos lugares por situaciones de endeudamiento, inundaciones, construcción de hidroeléctricas, y entrada de compañías mineras y madereras. En las áreas marginales y de colo-

nización, las demandas y protestas giraron en torno a dos ejes principales que muchas veces aparecieron combinados. Uno de ellos fue la exigencia de apoyo estatal al desarrollo regional a través de la construcción de obras de infraestructura y la extensión de servicios elementales como educación, salud, etc. El otro eje fue la violencia, ya que los conflictos entre guerrillas, ejército, narcotraficantes y paramilitares convirtieron a regiones enteras en zonas de victimización de la población campesina. En lugares como el Magdalena Medio, Urabá, el sur de Córdoba, y los frentes de colonización surorientales, el reclamo del derecho a la vida y la paz fue el tema principal de la protesta campesina.

En relación con el repertorio de lucha, los años ochenta vieron una verdadera explosión de creatividad campesina. El Cuadro No. 7, además de ilustrar la multiplicidad de modalidades, indica un grado de correlación entre los tipos de problemática y las formas de movilización. En el caso de la lucha por la tierra la modalidad principal, siguió siendo la invasión de predios como método directo para alcanzar el objetivo deseado. En las protestas por problemas específicos de sectores campesinos predominaron las tomas de oficinas, las manifestaciones y los bloqueos de carreteras, formas puntuales de ejercer mucha presión de manera concentrada. En las movilizaciones por el desarrollo de las zonas marginales lo más típico fue el ejercicio de fuertes presiones sobre capitales regionales a través de ocupaciones de plazas públicas y grandes paros cívicos. La guerra y la represión evocaron respuestas dramáticas incluyendo manifestaciones, tomas de iglesias y lugares públicos y, sobre todo, éxodos de comunidades enteras hacia ciudades cercanas para huir de los ataques y exigir la pacificación.

84 Aquí es necesaria otra advertencia metodológica. Los datos que se presentan en los cuadros siguientes provenientes del análisis de la carpeta "conflictos rurales" del Archivo de Prensa del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) de Bogotá. La carpeta incluye los reportes correspondientes a la gran mayoría, pero no todos los eventos de protesta en el campo, ya que algunos casos de movilizaciones indígenas y obreras han sido catalogados en las carpetas sobre "grupos étnicos" y "sindicalismo".

85 L. Zamosc, "Luchas Campesinas y Reforma Agraria: la Sierra Cuatoriana y la Costa Atlántica Colombiana en Perspectiva Comparativa", *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 52, N.º 2, 1990, pp. 164-165.

CUADRO No. 7

COLOMBIA: REIVINDICACIONES PLANTEADAS EN LAS MOVILIZACIONES AGRARIAS LOCALES Y REGIONALES: ESCENARIOS Y REPERTORIOS DE LUCHA, 1978-1988

TIPOS DE REIVINDICACIONES								
	[1] Lucha por la tierra	[2] Defensa eco-campesina	[3] Servicios y desarrollo	[4] Contra la represión	[5] combinación	[6] De carácter político	[7] Otras y sin información	Total
Total movilizaciones	189	42	59	57	27	38	28	440
ESCENARIOS								
[1] Zona cafetera	4	2	1	-	-	-	1	8
[2] Otras áreas andinas	26	28	14	6	2	8	3	87
[3] Valles interandinos	18	3	4	5	3	1	2	36
[4] Costa atlántica	121	5	11	3	4	15	13	172
[5] Areas marginales	20	4	29	43	18	14	9	137
REPERTORIO DE LUCHA								
[1] Marchas	3	5	8	6	3	7	1	33
[2] Tomas de oficinas	32	13	8	4	3	3	2	65
[3] Tomas lugares públicos	15	1	15	9	5	6	2	53
[4] Manifestaciones	4	7	6	12	2	6	2	39
[5] Bloqueos carreteras	2	9	4	1	-	-	-	16
[6] Paros cívicos	-	5	16	3	2	12	-	38
[7] Paros agrarios	-	1	2	-	2	2	-	7
[8] Paros obreros	-	-	-	3	-	-	1	4
[9] Exodos organizados	-	-	-	19	10	2	-	31
[10] Jomadas de lucha	-	1	-	-	-	-	-	1
[11] Invasiones	133	-	-	-	-	-	20	153

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuente: CINEP, Archivo de Prensa, microfichas carpeta Conflictos rurales, Bogotá, 1978-1988.

Tipos de reivindicaciones. (1) Tierras y/o titulación de predios en disputa. (2) Crédito, mercadeo, asistencia técnica, impuestos, problemas ecológicos, desastres naturales y problemas de cultivos específicos. (3) Provisión de servicios, obras de infraestructura, presencia de entidades estatales y realindamiento de reservas ecológicas. (4) Garantías a la vida, derecho a la paz y protestas contra violencia por parte de las fuerzas armadas y/o grupos privados, paramilitares y guerrilleros. (5) Combinación de los dos tipos de reivindicaciones anteriores. (6) Incluye reivindicación de derechos políticos, derechos de asociación y también movilizaciones cuyo propósito es el de participar en demostraciones de fuerza a nivel regional o nacional. (7) Incluye demandas del proletariado rural sobre salarios y condiciones de trabajo, reivindicaciones de pescadores, pobladores rurales desplazados que ocupan predios urbanos para construir viviendas, y otras movilizaciones sin infomación.

Escenarios. (1) Caldas, Quindío y Risaralda. (2) Con excepción de las subregiones mencionadas entre las áreas marginales, incluye Antioquia, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander y Santander. (3) Huila, Tolima y Valle del Cauca. (4) Con excepción de las subregiones mencionadas entre las áreas

marginales, incluye Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. (5) Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vichada, Magdalena Medio, nordeste de Antioquia, sur de Bolívar y Urabá antioqueño.

Repertorio de lucha. (1) Desplazamientos masivos hacia ciudades con el propósito de elevar demandas. (2) Tomas de oficinas de entidades hacia las cuales van dirigidas las demandas. (3) Ocupaciones de plazas, iglesias, escuelas y otros lugares públicos. (4) Se incluyen mítines, festivales, demostraciones y cabildos. (5) Se incluyen bloqueos de ciudades. (6) Cese de todas las actividades por parte de la población en general. (7) Cese de actividades económicas por parte del campesinado. (8) Huelgas de trabajadores asalariados. (9) Desplazamientos organizados desde lugares afectados por la violencia. (10) Días de protesta y agitación. (11) Ocupaciones de predios con el propósito de utilizarlos para la agricultura o para construir viviendas. En muchos casos el evento incluye varias ocupaciones simultáneas.

En el Cuadro No. 8, que relaciona las movilizaciones regionales según protagonistas, hemos agrupado dentro de grandes categorías a los dos sectores de la ANUC, los grupos vinculados a las diversas corrientes de la izquierda legal y guerrillera, y las demás organizaciones campesinas

e indígenas. Desde el punto de vista cronológico, es importante observar que la izquierda política sólo comenzó a representar un papel importante cuando la agitación agraria ya había iniciado su curva ascendente. Esto sugiere que, sobre el contexto de las negociaciones de paz que se iniciaron durante el gobierno de Betancur, los insurgentes se esforzaron por emular el modelo de lucha cívica pacífica y ganar espacio como representantes de las aspiraciones de los campesinos de sus regiones en su propio proceso de reincorporación a la vida política legal. Al resumir las conexiones entre protagonistas, esce-

narios y reivindicaciones puede decirse que la ANUC siguió siendo la organización de la lucha por la tierra, principalmente en la Costa Atlántica y en los valles interandinos. La influencia de la izquierda fue en las áreas marginales y de colonización, zonas tradicionales de actividad guerrillera donde las demandas principales giraron en torno a los servicios, el desarrollo y la protesta contra la represión. La actividad de las demás organizaciones se concentró en las zonas andinas, principalmente en torno a los problemas de los minifundistas y las reivindicaciones de los indígenas.

CUADRO No. 8

COLOMBIA: ACTORES INVOLUCRADOS EN LAS MOVILIZACIONES AGRARIAS REGIONALES: CRONOLOGIA, ESCENARIOS Y REIVINDICACIONES

ACTORES ORGANIZATIVOS						
	[1] ANUC	[2] ANUC/IZQ.	[4] OTROS	[5] VARIOS	[6] SIN INFOR	TOTAL
Total movilizaciones	43	29	30	13	8	198
CRONOLOGIA						
1978	-	-	-	-	-	-
1979	-	-	1	-	-	1
1980	-	-	1	■	1	3
1981	1	-	3	-	1	5
1982	1	-	-	1	-	3
1983	2	-	7	-	1	12
1984	11	1	7	1	1	24
1985	7	5	1	2	1	32
1986	5	3	4	3	1	30
1987	13	9	5	5	2	59
1988	3	11	1	1	-	29
ESCENARIOS						
[1] Zona cafetera	-	-	-	-	-	2
[2] Otras áreas andinas	1	2	19	5	3	41
[3] Valles interandinos	8	-	3	-	-	16
[4] Costa Atlántica	28	18	6	5	2	66
[5] Areas marginales	6	9	2	3	3	73
REIVINDICACIONES						
[1] Lucha por la tierra	36	9	7	4	-	62
[2] Defensa eco campesina	1	-	19	4	2	28
[3] Servicios y desarrollo	2	3	2	4	1	33
[4] Contra la represión	3	1	1	1	4	26
[5] Combinación [3] y [4]	-	5	-	-	-	26
[6] De carácter político	1	11	-	-	-	21
[7] Otras y sin información	-	■	1	-	1	2

FUENTES Y ACLARACIONES

Fuente: CINEP, **Archivo de Prensa**, microfichas carpeta Conflictos rurales, Bogotá, 1978-1988. Sobre las definiciones correspondientes a los escenarios y los tipos de reivindicaciones, véanse las aclaraciones del cuadro anterior. Los actores organizativos se definen como sigue: (1) sectores de la ANUC; (2) acciones conjuntas de sectores de ANUC y de izquierda; (3) sectores vinculados a partidos de izquierda o influidos por organizaciones guerrilleras; (4) sectores ligados a otras organizaciones políticas, independientes, indígenas, regionales, etc.; (5) acciones conjuntas de sectores de ANUC, de izquierda y ligados a otras organizaciones; (6) sin información.

En un ensayo reciente analizamos algunos casos concretos de movilizaciones regionales en Arauca, Santander y Sucre, lugares que tipifican la situación del campesinado en las áreas de colonización, minifundio y lucha por la tierra⁸⁶. Sobre la base de ese análisis de casos y los materiales que hemos venido aportando en este trabajo, trataremos de esbozar una conclusión general sobre el sentido de las luchas de los años ochenta. Considerando el contexto general de la cuestión agraria, la intensidad de las luchas, el abanico de sectores envueltos y la diversidad de las reivindicaciones, puede decirse que aunque el cambio radical de las estructuras no estaba en su agenda, el ciclo de movilizaciones representó una expresión masiva de protesta y de exigencia de políticas más favorables por parte del campesinado en su conjunto. Más allá de esto, lo que a nuestro juicio emerge como lo más interesante es la significación política de la protesta campesina. En los casos concretos que hemos mencionado, y en casi todas las movilizaciones de alcance regional que hemos tenido ocasión de examinar, encontramos una serie de similitudes que se destacan por encima de las diferencias entre lugares, demandas y formas de movilización. Esas similitudes conforman una pauta bien definida: los campesinos ignoran los canales oficiales, recurren a la movilización masiva para alterar el orden público, y

siempre persiguen el mismo objetivo estratégico de entenderse directamente con gobernadores o ministros. El hecho de que los campesinos generen situaciones de excepción para negociar colectivamente “por lo alto” expresa, en el fondo, su sentimiento de alienación política. Sabiendo que sus demandas nunca serán procesadas por un sistema que no los representa, los campesinos alteran el orden para forzar la intervención del Estado y abrir un canal de comunicación directa. Al hacerlo, ejercen presión sobre el Estado, pero al mismo tiempo reconocen su autoridad, su autoridad. Lo que vemos, entonces, es un claro intento de lograr incorporación política: los campesinos quieren ser sujetos de un Estado en el cual estén representados como ciudadanos⁸⁷.

Aunque los logros de las luchas de los años ochenta han sido modestos, no se trata de logros despreciables. Por un lado, los campesinos se han fortalecido como actores en muchas regiones del país, donde el proceso de movilizarse les ayudó a definirse colectivamente, revitalizar sus organizaciones y relacionarse con otros sectores sociales⁸⁸. Por otro lado, consiguieron erigirse en interlocutores del Estado y obtener muchos avances concretos, sobre todo durante el gobierno de Barco: nueva ley de reforma agraria que, a pesar de su moderación, permitió que se reactivara la redistribución de la tierra en las zonas de mayor conflicto; aumentó sustancial de las partidas para el desarrollo rural integrado; grandes inversiones en las regiones marginales y de colonización a través del Plan de Rehabilitación; mayor representación campesina en las entidades oficiales y provisión de un fondo estatal para financiar el funcionamiento de las organizaciones campesinas⁸⁹. Por último, hay que destacar el importante efecto político de las movilizaciones que desarrollaron conciencia crítica frente al clientelismo y que, en conjunto con las luchas cívicas urbanas, pusieron sobre el tapete

86 L. Zamosc, op. cit., pp. 317-321, 330-333.

87 Esta interpretación se inspira parcialmente en el enfoque de R. Bendix, *Nation Building and Citizenship: Studies of Our Changing Social Order*, New York, 1964, pp. 61-71.

88 L. Zamosc, op. cit., pp. 331-332.

89 *Ibid.*, pp. 332, 355-356.

la cuestión de la democratización y la extensión efectiva de la ciudadanía a los sectores populares⁹⁰.

El hecho de que las luchas campesinas tengan gran relevancia política no las convierte, sin embargo, en luchas que puedan definirse en sí mismas como políticas. Para eso sería necesario un proyecto orgánicamente articulado que tuviera incidencia directa en la arena política nacional. Desde este punto de vista la situación es desfavorable porque hoy no puede decirse que exista un movimiento campesino. En los años setenta, la ANUC había llegado a cumplir un papel integrador y había servido como vehículo de politización a nivel nacional. Si hoy hablamos de “movilizaciones”, y no de “movimiento”, esto se debe precisamente a la ausencia de un agente orgánico que unifique e imparta una dirección coherente al reguero de luchas agrarias. Existen muchas organizaciones, y como ninguna tiene cobertura nacional efectiva, lo que resulta es una situación de gran fragmentación. Ha habido intentos de buscar convergencias, expresados en la formación de una coordinadora que participó en el debate sobre la ley de reforma agraria e incluso promovió algunos foros conjuntos de discusión y jornadas de protesta. Pero esta coordinación ha sido muy discontinua y cupular-burocrática. Los principales obstáculos siguen siendo las diferencias ideológicas y la pretensión de cada fuerza política de ganar influencia a costa de las demás. De hecho, las organizaciones continúan actuando de manera dispersa y es de prever que, al menos en los próximos años, la cuestión de la unidad campesina seguirá siendo problemática⁹¹.

Las perspectivas para la democracia en el campo

Tanto los avances hacia la unidad del campesinado como el impacto agrario y político de sus

luchas, dependen de procesos más amplios en los cuales intervienen otros actores. Aquí, uno de los problemas claves es que los campesinos no han encontrado aliados, ya que no se han perfilado protagonistas políticos capaces de ofrecer un proyecto democratizador que incorpore las aspiraciones populares y privilegie la participación de los sectores plebeyos. En la Colombia del Frente Nacional, la principal oposición política fue la oposición armada. Pero la crisis de legitimidad que se venían expresando a través de la insurgencia y las luchas agrarias no llegaron a confluir en una situación revolucionaria en el campo. Por un lado, los imperativos tácticos de la guerra de guerrillas hicieron que los insurgentes se concentraran en las regiones periféricas del país, lo cual los confinaba a lugares marginales que contemnan una proporción muy reducida de la población rural. Por otro lado, hemos visto que las luchas campesinas expresaban una aspiración de incorporación ciudadana que, al mismo tiempo que impugnaba la legitimidad del régimen político, reconocía la autoridad última del Estado. Esta orientación incorporativa no podía ser politizada en el marco de un proyecto de revolución armada. Para eso hubieran sido necesarias circunstancias adicionales que produjeran un colapso total de la legitimidad estatal, tales como la represión frontal de las luchas populares o un golpe militar que acabara con toda semblanza de orden constitucional. Pero estas circunstancias no se presentaron, y los guerrilleros nunca pudieron adquirir suficiente poderío militar para forzar por sí mismos la crisis final del Estado⁹². A la postre, los insurgentes sólo se proyectaron como posibles aliados del campesinado cuando, sobre el contexto de la apertura política, algunos grupos comenzaron a combinar su orientación incorporativa con el intento de abanderar aspiraciones populares⁹³. De todas maneras, en 1990 las perspectivas seguían siendo negativas porque las organizaciones guerrilleras con mayor

90 *Ibid.*, pp. 333, 368-369.

91 *Ibid.*, pp. 335-336.

92 Para un recuento general sobre la evolución del conflicto guerrillero véase E. Pizarro, “La Insurgencia Armada: Raíces y Perspectivas”, en F. Leal y L. Zamosc (eds.), *Al Filo del Caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta*, Bogotá, 1990. Para un análisis más específico sobre los motivos por los cuales no hubo convergencia entre las luchas campesinas y la acción guerrillera véase L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 336-350.

93 *Ibid.*, pp. 345-347.

base campesina mantenían una actitud equívoca en relación a la posibilidad de dejar definitivamente las armas. Además sus zonas de influencia continuaban siendo restringidas, sus estilos de conducción seguían siendo esencialmente coercitivos, y buena parte del campesinado las consideraba como casuantes directas de la pesadilla de violencia⁹⁴.

La otra fuente posible de liderazgo para un proyecto de democratización serían los sectores reformistas de la clase política. Aunque hay que reconocer la importancia de las iniciativas de los gobiernos de Betancur y Barco, también hay que decir que, al menos en la forma como se venía desarrollando hasta mediados de 1990, la recomposición desde arriba ofrecía perspectivas muy limitadas para la extensión de la ciudadanía hacia los sectores populares. El problema principal venía inscrito en su esencia misma como reacción defensiva que trataba de atajar la desintegración del régimen por medios puramente institucionales. En el medio rural los gestos de apertura apuntaron a reconocer la legitimidad de las reivindicaciones del campesinado como clase, ampliar la respuesta a sus demandas económicas y proveer marcos institucionales para tramitarlas. Esto no es suficiente para impulsar la democratización rural, ya que las instituciones son sólo arenas para la práctica política y, en las condiciones que prevalecen en el campo colombiano, todas esas arenas y todos los programas estatales son candidatos seguros para el copamiento clientelista. Por este motivo, ningún proyecto reformista podrá ser exitoso sin una interpelación directa al campesinado como sujeto político. Tal politización tendría que asumir la forma de un movimiento en el cual las fuerzas reformistas lograran articularse con el campesinado y los otros grupos plebeyos para

que los cambios institucionales reflejen sus aspiraciones. Hasta hace muy poco, las limitaciones de las propuestas desde arriba indicaban que la decisión de arriesgar la carta del verdadero reformismo aún no había madurado en el interior de la élite política colombiana. En este caso, sin embargo, las perspectivas parecen más prometedoras, ya que la escena política del país está cambiando rápidamente como resultado de la convocatoria de la Asamblea Constituyente por parte del nuevo presidente liberal César Gaviria, los realineamientos que el derrumbe del régimen de coalición ha venido produciendo dentro de los partidos tradicionales, y el surgimiento de una fuerza política de corte socialdemócrata en torno al antiguo movimiento guerrillero M-19.

Además de la falta de aliados, el otro problema clave de los campesinos ha sido la presencia de enemigos poderosos y despiadados. En Colombia lo que estamos viendo es el parto difícil de una posible nueva democracia. Esto generó una reacción particularmente virulenta en las áreas rurales porque el campo es el espacio social en el cual el poder político clientelista está más atrincherado y en donde la lucha popular, sobre todo la lucha campesina por la tierra, atenta de manera más directa contra los intereses de las clases dominantes. El hecho de que, además, se planteara la amenaza de una convergencia de la insurgencia guerrillera con las luchas sociales creó un caldo de cultivo ideal para que caciques políticos, terratenientes y militares fueran articulándose en torno a un proyecto regresivo propio⁹⁵. La situación se agravó con la entrada de los narcotraficantes, que además de implantar un modelo "siciliano" de reconcentración de la tierra, aportaron recursos económicos para fortalecer el paramilitarismo y asumieron el liderazgo de la

94 *Ibid.*, pp. 347-350. De las cuatro organizaciones guerrilleras principales, las dos que hasta ahora se han desmovilizado y reincorporado a la legalidad política son el M-19 (que se había desarrollado en las ciudades y que nunca logró arraigarse en las zonas rurales) y el EPL (que tenía ascendente entre los trabajadores agrícolas de las plantaciones bananeras). Los grupos armados que mantienen una actitud equívoca, las FARC y el ELN, son justamente los únicos que pueden reivindicar un cierto grado de influencia real entre los campesinos. Pero, como se ha indicado, esa influencia es muy problemática y se reduce a las zonas rurales menos pobladas del país.

95 Sobre este proceso véase J. O. Meló, "Los Paramilitares y su Impacto sobre la Política", en F. Leal y L. Zamosc (eds.), **Al filo del caos: crisis política en la Colombia de los años ochenta**, Bogotá, 1990.

alianza reaccionaria que se venía gestando en el campo⁹⁶. Las consecuencias han sido tenebrosas. La violencia, además de neutralizar la capacidad de lucha campesina, marca un retroceso en la agenda de la extensión de la ciudadanía, ya que la cuestión de la libertad política es forzosamente desplazada a un segundo plano ante el problema más urgente de la violación de las garantías elementales y del derecho a la vida.

Hoy para el campesinado una pregunta clave es si los avances del proceso de paz y la ofensiva antimafiosa que se inició durante el gobierno de Barco lograron poner fin a la violencia. Pero el principal interrogante tiene que ver con el futuro de la democracia. ¿Lograrán finalmente los campesinos la incorporación efectiva como ciudadanos? Es importante aquí especular sobre la coyuntura inmediata y las perspectivas que se abren con la Asamblea Constituyente. Nos limitaremos a cerrar el tema de las luchas de los años ochenta con un comentario sobre las causas del descenso de la agitación campesina que, como ya se indicó, ha sido paralelo al reflujo de las luchas urbanas. Es cierto que, en las zonas afectadas por la violencia, el declive fue un resultado directo del auge de la "guerra sucia"⁹⁷. Pero más globalmente, se nota un efecto de apaciguamiento que se deriva no solamente de la recuperación económica de los últimos años, sino también de la mayor respuesta estatal a las demandas campesinas y que, después de haber arrancado una gran cantidad de promesas, el campesinado ha entrado en una actitud de pausa y expectativa con relación a la gestión estatal. Tomando esto en cuenta podemos terminar con un colofón macrosociológico: en los años ochenta el campesinado y los demás sectores populares plantearon a la sociedad sus demandas socioeconómicas y su aspiración de democracia política, sus movilizaciones fueron una pieza clave en la combinación que dio jaque mate al régimen biparti-

disto, y lo que ahora observamos es un compás de espera en torno al reacomodamiento del tablero y la redefinición de las reglas del juego político.

IV. CONCLUSION

Recapitulando, podemos proveer una respuesta concisa a nuestros interrogantes iniciales sobre los derroteros de la cuestión agraria en Colombia. En las últimas tres décadas el país experimentó grandes transformaciones como resultado de lo que, por referencia a otros casos latinoamericanos, puede calificarse como un proceso acelerado y exitoso de consolidación capitalista. Dentro de ese proceso el sector agropecuario exhibió la capacidad necesaria para modernizarse, mantener una dinámica adecuada de crecimiento y satisfacer de manera amplia las exigencias planteadas por la urbanización y la expansión industrial. Estructuralmente, esta respuesta se dio a través del afianzamiento de una pauta bimodal marcada por el desarrollo paralelo, complementario y contradictorio de la agricultura campesina y la capitalista. Desarrollo paralelo, porque ambos sectores se expandieron y porque se fue dando una territorialización diferencial marcada por el predominio del campesinado en las montañas y del capitalismo agrario en las planicies. Desarrollo complementario, porque ambos sectores tienden a especializarse en producciones diferentes y porque existen flujos de mano de obra temporal que vinculan a los campesinos con la gran agricultura empresarial. Finalmente, desarrollo contradictorio porque los patrones de territorialización y especialización no son absolutamente homogéneos, porque varias ramas productivas se caracterizan por la competencia y porque, en última instancia, las perspectivas para la evolución de los dos tipos de agricultura dependen del modo en que és-

96 L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 360-367.

97 C. González, "Una Caldera Sellada", *Cien Días*, No. 6, 1989, pp. 20-21. Durante 1988 la violencia política fue causa de 8256 asesinatos y desapariciones. La mayor parte de las víctimas fueron campesinos, trabajadores agrícolas y otros pobladores rurales (L. Zamosc, *op. cit.*, pp. 311).

tas se disputan y reparten el acceso a la tierra y a otros recursos como el crédito y los apoyos institucionales.

Dentro de esta dinámica global, la población campesina se mantuvo aproximadamente al mismo nivel en términos absolutos, retuvo bajo su control una proporción constante de la superficie agropecuaria e incluso aumentó el volumen de su producción bruta. Los campesinos lograron reproducir su base física haciendo gala de mucha flexibilidad para ajustarse a los cambios macroeconómicos, incorporarse al mercado y asimilar nuevas tecnologías. Sin embargo, y justamente por la gran desigualdad en el acceso a la tierra y a los otros recursos, la evolución *agraria* en su conjunto ha sido desfavorable para ellos. Una de las principales evidencias en este sentido es la pérdida de importancia relativa de la pequeña producción, que no se debe solamente al desarrollo de nuevos cultivos "capitalistas", sino que también es resultado de la competencia en ramas productivas que habían sido tradicionalmente "campesinas" y que siguen siendo centrales dentro de la economía parcelaria. El otro cuerpo de evidencias relevantes se relaciona con el hecho de que, a pesar de la existencia de algunas capas que han logrado mejorar sus condiciones de vida y producción, la situación general del campesinado se sigue caracterizando por la reproducción de niveles proverbiales de pobreza que, entre los sectores más débiles, alimentan procesos continuos de disolución, proletarización y expulsión de población.

Desempeño productivo satisfactorio del sector agropecuario en su conjunto, relegamiento progresivo de la economía campesina y consolidación de una agricultura capitalista que no ofrece garantías de empleo y bienestar para la mayoría de la población rural, reunidas estas tres tendencias indican que la pauta de evolución agraria colombiana ha sido altamente funcional para el desarrollo capitalista del país, pero muy discriminatoria desde el punto de vista de las aspiraciones de los sectores populares del campo. Esto nos ayuda a entender la gran intensidad que han tenido las luchas campesinas en Colombia. Como es característico del protagonismo social y políti-

co del campesinado en general, esas luchas han sido episódicas. Hacia finales de los años sesenta y principios de los setenta, el campesinado pareció comprender que la evolución agraria estaba llegando al punto crítico del no retorno y, sobre ese filo de la historia, hizo un esfuerzo dramático para forzar la redistribución de la tierra y establecer las condiciones para que prosperara una vía parcelaria de desarrollo en el campo. La beligerancia clave fue la de los campesinos sin tierra; la modalidad más importante de lucha fue la lisa y llana invasión, y hubo un discurso ideológico explícito que se fue radicalizando desde las posiciones reformistas a las revolucionarias. El proceso en su conjunto estuvo marcado por la gran organicidad que alcanzó la ANUC como agente articulador a nivel nacional, y también por una matriz cambiante de alianzas y confrontaciones con el Estado y con los sectores políticos de izquierda.

Sobre el contexto de la derrota de la ANUC y la consolidación del modelo bimodal de evolución agraria, el ciclo que sobrevino en los años ochenta fue menos radical pero mucho más amplio. El espectro de actores abarcó a virtualmente todos los sectores del campesinado, que exhibieron un complejo repertorio de modalidades de lucha en sus batallas por la tierra, por la defensa de la economía campesina, por el desarrollo regional y por el derecho a la vida y la paz. Aunque las luchas carecieron de coordinación nacional y no se basaron en un discurso ideológico unitario, su sentido global implícito fue claramente incorporativo. Los campesinos elevaron demandas socioeconómicas moderadas; pero sus formas de movilización revelaron que el planteo de fondo tenía que ver con el reclamo de participación ciudadana: el deseo de lograr un cambio en su relacionamiento con el Estado y la aspiración de que sus gobernantes los representen y sean responsables ante ellos. A pesar de que a los campesinos les faltaron aliados y les sobraron enemigos, las movilizaciones de los años ochenta tuvieron efectos más contundentes que los de la década anterior. Más allá de los avances inmediatos en el plano socioeconómico, el impacto principal fue en el terreno político donde las luchas campesinas

se proyectaron como el flanco agrario de un embate popular más amplio que, al confluir con los otros elementos de la crisis, contribuyó a provocar el derrumbe final del régimen de coalición bipartidista.

El contraste entre los dos ciclos de lucha nos invita a una reflexión final. A principios de los setenta, cuando todo su ímpetu se centró sobre la batalla por la tierra, el movimiento campesino fue muy receptivo a los discursos anticapitalistas revolucionarios. La inspiración provenía de sectores externos que tenían horizontes utópicos bien definidos y que veían al Estado como un instrumento que debía ser capturado para implantar proyectos de clase. En los años ochenta —cuando los campesinos se presentaron en la escena de manera dispersa, poco conectados con vanguardias ideológicas, y elevando un amplio abanico de reivindicaciones diversificadas— vemos una expresión más representativa de lo que es una clase campesina heterogénea en una sociedad capitalista. El sentido global de la demanda fragmentada, su implicación política, fue la democratización, en la que el Estado aparece como un espacio de representación y negociación, y donde la utopía de reconstruir el mundo a la imagen y semejanza de los actores sociales es reemplazada por el “nomadismo del presente”⁹⁸.

¿Podemos, en vista de esto, hablar de un retroceso? Tal vez sí, si enfocamos el problema desde el punto de vista de ciertas variantes dogmáticas del modernismo, sean liberales o marxistas, que machacan las tesis de la ineluctable desaparición del campesinado y de la necesi-

dad de su subordinación a los proyectos políticos de otros actores. Pero tal vez no sea un retroceso si miramos el asunto desde la perspectiva de los campesinos, cuyas orientaciones ideológicas frente al capitalismo van variando con el proceso histórico. Casi todas las teorías sobre la movilización campesina se construyeron sobre el referente empírico de los impactos capitalistas iniciales sobre universos agrarios tradicionales”. Al enfatizar las orientaciones reactivas anticapitalistas de los campesinos, estas teorías pueden ser efectivas para explicar muchas de las movilizaciones del pasado; pero resultan claramente anacrónicas cuando se las aplica a la mayoría de las luchas contemporáneas. En las sociedades en las cuales el capitalismo ya se ha consolidado, las orientaciones campesinas reflejan elementos que, por referencia a los debates teóricos actuales, podríamos encuadrar dentro del síndrome de la posmodernidad. Por el lado de la negación se percibe el rechazo no solamente de las metanarrativas que plantean la inevitabilidad de la desaparición de los campesinos bajo el capitalismo, sino también de las prácticas socioeconómicas y los proyectos políticos que pretenden convertir esas metanarrativas en hechos cumplidos. Por el lado de la afirmación lo principal es el reconocimiento de las realidades históricas impuestas por la modernización capitalista y, desde esa perspectiva, la reivindicación de un pluralismo económico y político que haga posible la continuidad de la pequeña producción mercantil y de los valores sociales y culturales asociados con esa forma de producción¹⁰⁰.

Para enriquecer la teoría, hay que abandonar la noción de que las orientaciones reactivas

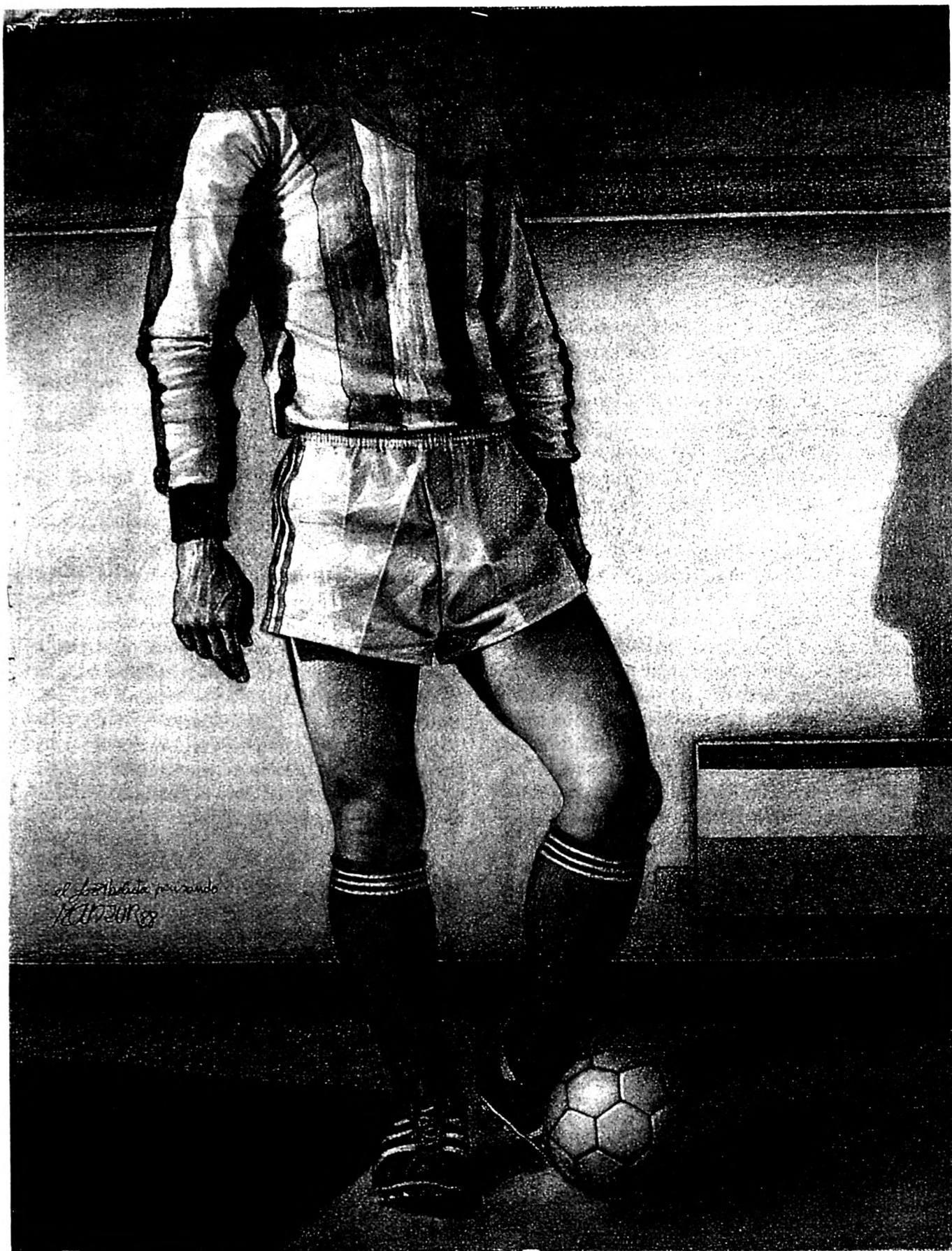
98 A. Melucci, **Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society**, Philadelphia, 1989.

99 Véase B. Moore, **Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World**, Boston, 1967; E.R. Wolf, **Peasant Wars of the Twentieth Century**, New York, 1969; y J. C. Scot, **The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence en Southeast Asia**, New Haven, 1976.

100 Son muy variados los significados que se debaten en torno al concepto de posmodernidad. La pérdida de credibilidad de las metanarrativas (las concepciones teleológicas de la historia) y la apropiación y redefinición del discurso de la modernidad (lo que algunos autores llaman la política de la “representación” o del “simulacro”) son los dos elementos **que** nos parecen más sugestivos para iluminar las orientaciones de las luchas populares contemporáneas en América Latina. Sobre el primero de estos elementos véase J. F. Lyotard, **The Postmodern Condition: a Report on Knowledge**, Minneapolis, 1984. Sobre el segundo véase A. Ross, “Introduction”, en A. Ross (ed.), **Universal Abandon? The Politics of Postmodernism**, Minneapolis, 1988; S. Aronowitz, “Postmodernism and Politics”, en A. Ross (ed.), **Universal Abandon? The Politics of Postmodernism**, Minneapolis, 1988; y L. Hutcheon, **The Politics of Postmodernism**, London, 1989.

que los campesinos hayan podido exhibir bajo el impacto inicial del capitalismo son una característica permanente de su participación política. Si se pretenden entender las luchas campesinas contemporáneas, la premisa teórica fundamental debe ser la idea de que, con la consolidación del capitalismo, el campesinado evoluciona como sujeto social cuyas aspiraciones se orientan no solamente hacia la defensa y promoción de la economía campesina libre sino también hacia la conquista y el ejercicio de los derechos políticos que deberían venir asociados con el status ciudadano en la nueva sociedad. Desde esta perspectiva no es difícil ver que dentro del contraste entre los dos ciclos de luchas agrarias colombianas hay una continuidad fundamental: la actitud, tan típica del

campesinado, de realismo político. Cuando los campesinos pesaban más en la población —se disolvían las relaciones de producción tradicionales, se avizoraba el despegue del capitalismo agrario y había surgido un movimiento unificado que contaba con aliados—, lo más realista era asumir un talante radical y apostar todo en la lucha por la tierra. Después de la derrota, cuando las condiciones cambiaron y se hizo cada vez más evidente que se imponía el patrón bimodal de desarrollo agrario, lo más realista pasó a ser la defensa de la economía campesina y, como parte de eso, la búsqueda de participación y representación dentro del Estado. Este continuará siendo, seguramente, el sentido principal de las luchas de los campesinos colombianos en el futuro próximo.



el futbolista pensando
1988